

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 27º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-2378-2018
CARATULADO : OLGUÍN/FISCO DE CHILE

Santiago, treinta de Junio de dos mil veintiuno

VISTOS:

En la presente causa electrónica **Rol C-2378-2018**, por presentación de fecha 23 de enero de 2018, folio 1, se presenta doña Paz Valentina Becerra Urzúa, abogada, con domicilio en Paseo Estado N° 215, oficina 806, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, en representación convencional de don **AUGUSTO DEL CARMEN OLGUIN GONZÁLEZ**, cédula de identidad número 5.586.159-5, jubilado, con domicilio para efectos de autos en Paseo Estado N° 215, oficina 806, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, quien deduce **demanda en procedimiento ordinario (Juicio de Hacienda) de Indemnización de Perjuicios** por Crímenes de Lesa Humanidad, en contra del **FISCO DE CHILE**, persona jurídica de derecho público, Rol Único Tributario N° 61.806.000-4, representado legalmente por la Presidente del Consejo de Defensa del Estado doña **María Eugenia Manaud Tapia**, abogado, ambos con domicilio en Agustinas N° 1687, comuna y ciudad de Santiago, a objeto que, en atención a los hechos que expone y fundamentos de derecho que invoca, se acoja la demanda interpuesta y, en definitiva, acogerla en todas sus partes disponiendo: **1.-** Condenar expresamente al Estado de Chile a pagar a la parte demandante a título de indemnización de perjuicios por el **daño moral** sufrido causado por los crímenes perpetrados en su contra, la suma de **\$150.000.000** (ciento cincuenta millones de pesos), más reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, e intereses que la cantidad devengue desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo y total de la misma, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho, justicia y equidad, al mérito de autos; **y 2.-** que en todo evento se condene expresamente al demandado al pago de las costas de la causa.



En folio 6 de la carpeta electrónica y notificados que fuera la demandada de la acción dirigida en su contra con fecha 04 de junio de 2018, según consta del atestado receptorial de folio 4, se presenta doña Ruth Israel López, Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado por el Fisco de Chile, persona jurídica de derecho público, quien **contestando la demanda** deducida en su contra, solicita su total rechazo con costas, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho que expone y a las excepciones y defensas que opone, expresando que opone en primer lugar, **excepción de reparación integral e improcedencia de la indemnización** por haber sido ya indemnizado el demandante Augusto Del Carmen Olguín González, mediante transferencias directas de dinero, reparaciones mediante asignaciones y reparaciones simbólicas; y en segundo lugar, **la excepción de prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil**, en relación con el artículo 2497 del mismo cuerpo legal; **en subsidio, la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515**, en relación al artículo 2514 del Código Civil; y **en subsidio de las defensas y excepciones precedentes**, opone las alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y los montos pretendidos, refiriéndose a la regulación de la indemnización por daño moral y, luego, a la improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada.

En folio 10, el demandante evacua el trámite de **Réplica**, solicitando que se rechacen de forma íntegra los argumentos de la contraria, en atención a las consideraciones de hecho y de derecho que expone respecto de cada una de las excepciones opuestas y alegaciones deducidas, solicitando en definitiva, se rechace todos y cada uno de los argumentos de hecho y de derecho que la presentación de la contraria contiene, teniendo por establecida la responsabilidad del Estado de Chile, acogiendo la demanda de indemnización de perjuicios presentada por su parte, con expresa y ejemplar condenación en costas.

En folio 12, la parte demandada Fisco de Chile, evacúa el trámite de **Dúplica**, reiterando todas y cada una de las excepciones, alegaciones y defensas opuestas en la contestación de la demanda, reiterando el rechazo de la misma, en todas sus partes, con costas.



En folio 14, **se recibió la causa a prueba**, fijándose al efecto los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos y rindiéndose por las partes la prueba documental y testimonial que obra en autos.

En folio 52, y encontrándose los autos en estado, se **citó a las partes a oír sentencia**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, en estos autos se ha presentado don Augusto Del Carmen Olguín González, y deduce demanda en procedimiento ordinario (Juicio de Hacienda) de Indemnización de Perjuicios por Crímenes de Lesa Humanidad, en contra del Fisco De Chile, representado legalmente por la Presidente del Consejo de Defensa del Estado doña María Eugenia Manaud Tapia, a objeto que, en definitiva, se condene expresamente al Estado de Chile a pagar a la parte demandante a título de indemnización de perjuicios por el **daño moral** sufrido causado por los crímenes perpetrados en su contra, la suma de **\$150.000.000** (ciento cincuenta millones de pesos), más reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, e intereses que la cantidad devengue desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de la misma, o la suma que se estime ajustada a derecho, justicia y equidad, al mérito de autos; y que en todo evento, se condene expresa y ejemplarmente al demandado al pago de las costas de esta causa.

Bajo el acápite que denomina **ANTECEDENTES DE HECHO** y bajo el subtítulo **1.1 Antecedentes Generales**, expone ser un hecho de público conocimiento que el 11 de septiembre de 1973 es derrocado el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende Gossens, tomando el poder un régimen de facto que se extendería por casi 17 años, caracterizado por una situación de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, violencia política, jurídica y social de la que fueron víctimas cientos de miles de personas. Esta época de dictaduras militares en Latinoamérica, con razón, ha sido calificada por quién fuera el historiador más renombrado del siglo pasado como “el período más oscuro de su historia del siglo XX, la era de las dictaduras militares, el terrorismo de Estado y la tortura”. A pretexto de una situación de guerra interna, se produjeron graves violaciones a los derechos más fundamentales de la persona humana, establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados internacionales vigentes, la Constitución y las leyes. Agrega que una vez consumado el alzamiento contra el orden constitucional, los oficiales sediciosos, al margen de todo derecho, justicia o razón, implementaron un plan de violaciones masivas, sistemáticas e



institucionalizadas a los derechos humanos. Dicha política de represión, de tipo genocida, tenía por objetivo preciso el de exterminar a grupos nacionales segregados políticamente, cuya identidad se funda en sus aspiraciones y creencias políticas. Refiere que desde las más altas esferas de poder, utilizando medios, recursos e infraestructura estatal, implementando políticas de Estado, los cuerpos de seguridad desarrollaron un actuar que sólo puede ser calificado de ilícito, asesinando, secuestrando personas, haciéndolas desaparecer, y aplicando tormentos. Expone que los crímenes de lesa humanidad registrados en lo que hoy es la Sexta Región del Libertador Bernardo O'Higgins incluyeron ejecuciones, secuestros, torturas, detenciones en campos de concentración, relegaciones, persecución y exilio. Los hechos consignados en los Informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig), y de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech I) evidencian la implementación de esa política por parte del Estado de Chile desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990 en todo el país. La sistemática violación de los derechos fundamentales de las personas por la dictadura militar ha quedado grabada en la conciencia de quienes habitan las localidades de dicha región. A partir del 11 de septiembre un sinnúmero de personas, simpatizantes, partidarios o militantes de los partidos políticos Comunista, Socialista o Mapu, personas que participaban del proceso de la reforma agraria, dirigentes sindicales, trabajadores, campesinos, pobladores, estudiantes u otros, fueron detenidos, imputándoseles en algunos casos, hechos tales como ser organizadores de ficticios planes, asaltar cuarteles militares, pertenecer a grupos paramilitares, raptos de hijos de militares, organización, realización y participación en reuniones clandestinas, acopio de armas, intentos de apoderarse de los servicios públicos básicos, de las comunicaciones, del puerto, por la fuerza de las armas o en otros, sin prueba alguna con excepción de su simpatía, cercanía, pertenencia, tener relaciones de amistad o parentesco con quién tuviera alguna relación con algún partido político de izquierda. Esta práctica de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos fundamentales incluía, entre otras conductas criminales: (a) detenciones ilegales y secuestro; (b) la tortura como práctica generalizada; (c) violaciones y diversos maltratos sexuales; (d) desaparición forzada de prisioneros; (e) ejecuciones de opositores; (f) asesinatos con fines de intimidación pública; (g) actos de terrorismo de Estado contra opositores en el extranjero⁵; (h) trabajos forzados y otros tratos crueles a prisioneros; (i) detenciones masivas y



represión indiscriminada de personas; (j) uso indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes civiles, entre otros.

Continuando y bajo el subtítulo denominado **1.2.- La Sistematización Y Extensión De La Represión Y Las Violaciones De Derechos Humanos**, refiere que, las violaciones de derechos humanos tuvieron carácter sistemático y masivo desde el mismo día de la instauración de la dictadura militar en el país. De ese modo, indica, los hechos consignados en los informes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, evidencian la implementación y la existencia de una política estatal de parte del Estado de Chile durante el período 1973 a marzo de 1990 en la Región. La tortura era normal en las detenciones e interrogatorios. Éstos, como se ha comprobado, su ejecución correspondía a agentes y personal de los respectivos servicios de inteligencia de cada rama castrense, de investigaciones, y a Carabineros de Chile. En los centros de interrogatorio se sometía a torturas sistemáticas a los prisioneros con el fin de obtener alguna supuesta información buscada, hacer alguna declaración (con frecuencia auto incriminatoria), y/o aterrorizar al prisionero, así como a los otros quienes eran obligados a presenciar estas sesiones de sadismo, o bien a escuchar los gritos de dolor de sus compañeras y compañeros, imaginando lo peor, y siempre impotentes al no poder hacer nada para evitar que estos tratos vejatorios continuaran. Los testimonios concuerdan en que los servicios de seguridad, en especial la CNI, practicaron detenciones, amedrentamientos, amenazas y seguimientos. Aunque se mantenían las detenciones no reconocidas y las reclusiones en recintos secretos, la mayor parte de los declarantes que se refieren a la CNI indicaron que sus detenciones fueron reconocidas y registradas, apelando de preferencia, como justificación oficial de las mismas, a la legalidad e institucionalidad creada para enmarcar las acciones de dicho organismo. Los detenidos eran trasladados a recintos de la CNI, algunos secretos, pero la mayoría de público conocimiento. La permanencia en esos lugares tendía a ser más breve que en el período anterior; las personas con aprehensión admitida se encontraban técnicamente bajo régimen de incomunicación extensible a cinco días, plazo ampliable a un máximo de 20 días a partir de 1980. Añade que después de ese período de reclusión, los afectados a menudo eran derivados a las fiscalías militares y, eventualmente, se podía seguir un proceso formal en contra del detenido, en cuyo transcurso se acostumbraba tomar como medio probatorio principal confesiones firmadas durante la reclusión a cargo de la CNL. Como ya fue



señalado en ese Informe, estas confesiones autoinculpatorias fueron, no rara vez, resultado de torturas. Otros detenidos eran liberados en la vía pública o en sitios eriazos, con los ojos vendados y maniatados. Hoy es un hecho no controvertido que la inmensa mayoría de los prisioneros políticos que fueron encarcelados durante los 17 años de dictadura fueron sometidos a tortura. Durante el período comprendido entre 1973 y 1977 todos los presos políticos fueron víctimas de este crimen.

Expresa que de acuerdo a la información sistematizada por la Comisión Valech: **Principales métodos de tortura aplicados a Augusto del Carmen Olguín González: (i) Golpizas reiteradas.** A juzgar por la enorme cantidad de testimonios de personas golpeadas, puede afirmarse que las golpizas reiteradas constituyeron el método de tortura más socorrido durante el régimen militar y, en general, el primero que se aplicó a las víctimas de la represión. Era habitual que al momento de efectuarse la detención, la persona afectada, pese a no ofrecer resistencia, y estando incluso maniatada o esposada, fuese golpeada de manera intencional e injustificada. Este tipo de golpes, comúnmente llamados uso excesivo de la fuerza, constituyen tortura, pues no tienen otra finalidad que provocar un sufrimiento innecesario. Consta el caso de personas golpeadas en todo el cuerpo, de manera reiterada, por varios agentes, durante tiempo prolongado. También se dieron los golpes en partes específicas del cuerpo, no rara vez en las más sensibles, a veces hasta el sangramiento. Muchas de las personas golpeadas fueron previamente desnudadas y privadas del sentido de la vista mediante una venda en los ojos o la colocación de una capucha, que les impedía advertir los golpes y les generaba una mayor sensación de indefensión. Las golpizas ocurrieron antes, durante y después de los interrogatorios. La mayoría de las secuelas permanentes que pudo conocer esa Comisión corresponden a golpes infligidos a los detenidos; entre otras, pueden mencionarse la pérdida total y parcial de la visión, pérdida total o parcial de la audición, pérdida de piezas dentales, problemas renales, esterilidad y distintas lesiones en la columna. Finalmente, pese a que el tema escapa al mandato de esa Comisión, cabe mencionar que hubo personas muertas a golpes. **(ii) Amenazas.** De los testimonios de personas que sufrieron prisión política, una proporción importante señaló haber sido víctimas de amenazas, las que eran recibidas cuando se encontraban en situaciones de radical vulnerabilidad. Por amenaza se entiende la intimidación mediante la advertencia respecto de los graves males o peligros que se ciernen sobre la persona afectada o sobre terceros relacionados con la misma, en caso



de no satisfacer los deseos de sus captores. Reunidos ciertos requisitos, la amenaza constituye un delito en sí, sancionado por el Código Penal chileno. La amenaza grave es considerada un método de tortura causante de agudo sufrimiento psicológico en el detenido. La Comisión considera como tortura, las amenazas de muerte, de desaparición forzada y de aplicación de algún otro tipo de tortura (por lo general física) en la persona del detenido o en familiares cercanos. La amenaza, como método de tortura, fue ampliamente utilizada durante todo el período que comprende el mandato de la Comisión. Se recurrió al amedrentamiento para mermar la fortaleza del interrogado, bien antes o durante el interrogatorio, llegando al extremo de detener al cónyuge y a los hijos, incluidos los menores de edad, para exhibirlos al detenido mientras se le advertía que serían torturados, muertos o desaparecidos. Asimismo, se tomó conocimiento de casos en que los organismos de seguridad allanaron el domicilio del detenido y obtuvieron grabaciones o fotografías de sus familiares, las que fueron utilizadas para exponérselas al detenido y forzar su declaración. También se recibieron testimonios de detenciones de parientes cercanos a personas buscadas por los organismos de seguridad, con el objeto de presionarlas para que se entregaran. **(iii) Humillaciones y vejámenes.** Esa Comisión recibió abundantes testimonios de humillaciones y vejámenes. Éstos se aplicaron con mayor frecuencia durante los días inmediatamente posteriores al golpe de Estado. Bajo estas denominaciones se agrupan los tratos y las coacciones hacia el detenido cuya única finalidad es menoscabar su dignidad como ser humano, herir su honor, su honra y su orgullo personal. Están destinados a causar daño psíquico o mental grave. Prácticas como la ingestión forzada de desechos, no sólo provocaban un grave sufrimiento mental derivado del trato indigno de la condición de ser humano, sino que, ocasionalmente, también generaban daños físicos originados en las infecciones y enfermedades contraídas a causa de la materia ingerida.

Bajo el subtítulo **2. Antecedentes De Hecho Específicos Del Demandante**, indica que su representado **Augusto del Carmen Olguín González**, les ha hecho llegar el siguiente relato, en primera persona de los acontecimientos de los que fue víctima que motivan la demanda: “Desde mayo de 1972, estaba en Tanume, un asentamiento que nació de la toma del fundo de Aspillaga. En esa época trabajaba en Nancagua, en los Silos, los patrones no nos querían pagar y acudimos a Joel Marambio, él nos ayudó y por eso me inscribí en el Partido Socialista. Por la toma nos sacaron del lugar, el 20 de septiembre de 1973, nos acusaban de que teníamos armas. Me tomaron



detenidos a mí y dos personas más, uno de ellos es mi hermano que actualmente es exonerado, la otra persona falleció. Nos trasladaron a la Comisaría de Carabineros Pichilemu, en esa época ubicada cerca de la calle Aníbal Pinto. En ese lugar nos interrogaban violentamente, bajo amenazas y golpes, eran dos o tres los carabineros, no lo tengo claro porque nos tenían vendados. También nos dejaron amarrados a un pilar, de pie y en la noche, en el sector de las caballerizas, para hacernos sentir indignos, avergonzados. En los interrogatorios preguntaban por la militancia, no entendían que era porque sólo nos habían ayudado en gestiones, algunos militantes socialistas, aun así, nos golpeaban con armas, y con sus puños. En esa oportunidad estuve detenido dos noches completas y un día. Mientras estaba detenido, no sabía lo que pasaba con mi hermano. Eso era una incertidumbre inaguantable. Agregar además, que cuando nos bajaron del furgón, me golpearon con la carabina, de tantos golpes me fracturaron en el lado izquierdo de la cabeza, el dolor por mucho tiempo fue insoportable. Nunca pude ir al doctor, no me atrevía por las represalias y amenazas que hacían los propios carabineros, no me metí en nada, no era capaz ni siquiera de salir a la calle después de que me soltaron. Bueno y una de las noches, me sacaron de la Comisaría y fueron a dejar al sector conocido como Romero, a la orilla de la calle, con la vista totalmente vendada, me amenazaron con matarme si me movía, esperé toda la noche, después de varias horas me saqué la venda y reconocí el lugar y caminé hasta mi casa. Estos hechos me generaron un miedo total, muchos años de sufrimiento, vergüenza, temor de salir a cualquier parte, porque los mismos Carabineros de la Comisaría habían tenido participación en mi detención y en las torturas que recibí. Después seguí trabajando en el asentamiento, hasta que el Estado nos lo quitó en 1976. El único apoyo que he recibido en todos estos años, fue el de mi familia. Por lo expuesto, fui reconocida por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, individualizado en la **“Nómina de personas reconocidas como víctimas”**, elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura, conocida como **Comisión Valech II. Mi registro como víctima es el N° 6130.”**

Prosigue, señalando que los autores de esos hechos son agentes del Estado, que formaban parte del Ejército de Chile y Carabineros de Chile, que organizados, desarrollaron una política criminal al amparo de un régimen político dictatorial, cuyo origen ilegítimo se produce en el contexto de un golpe



de estado ocurrido el 11 de septiembre de 1973, todos los agentes que participaban de las sesiones de tortura tenían la calidad de funcionarios públicos o agentes del Estado en cuanto eran miembros de las Fuerzas Armadas. Asevera que en virtud de esa condición cabe responsabilidad civil al Estado de Chile. Existe responsabilidad extracontractual que tiene origen en un hecho ilícito, a raíz del cual se ha originado un daño, existiendo relación de causalidad entre la acción del funcionario público y el daño producido. La acción civil tiene su origen en un delito de lesa humanidad y por eso tiene un carácter humanitario. La Ley de Bases Generales de la Administración señala que el Estado será responsable por los daños que causaren los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que las hubiere ocasionado.

Luego, en su apartado que denomina **II. FUNDAMENTOS DE DERECHO** y bajo el subtítulo **1. La obligación de reparar**, hace presente que, los hechos descritos en su demanda, configuran graves violaciones a los derechos humanos, consistentes en crímenes de lesa humanidad, entre otros de tortura y persecución. Indica que en el caso de autos, se han vulnerado todos aquellos instrumentos de carácter internacional que consagren el derecho a la vida y a la integridad personal, principalmente, los artículos 1, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1° de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, los artículos 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todo el contenido de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, los Principios de Núremberg, los Convenios de Ginebra de 1949, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y las normas de “ius cogens” relativas a crímenes internacionales y por lo anterior, el deber de reparación debe abordarse desde una perspectiva doble por el carácter de estos hechos ilícitos que causan daño como crímenes de trascendencia internacional.

Continúa indicando bajo el subtítulo **1.1. La obligación de reparar en el Derecho Internacional** que, en el caso sub lite cabe señalar que “el Estado puede ser responsable por las violaciones convencionales cometidas en forma directa por sus agentes (de cualquier órgano del Estado), o bien



dicha responsabilidad puede emanar de una omisión del Estado de actuar en aquellos casos en que particulares afectan los derechos convencionales”, siendo en ese caso, agentes del Estado quienes han realizado las conductas ilícitas.

Asevera que, en este caso, la responsabilidad nace al momento de comisión del ilícito atribuible al Estado y, por ello, se hacen aplicables al acto en cuestión todos los criterios internacionales sobre obligaciones del Estado por violación de derechos humanos, dentro de las cuales se encuentra la obligación de reparar el daño causado. La obligación de reparar el daño que ha sido causado constituye un principio básico del Derecho Internacional. El derecho a una reparación adecuada y suficiente frente a una violación a una norma u obligación primaria ha dejado de ser simplemente un “principio general del derecho reconocido por las naciones civilizadas” en los términos del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, para llegar a ser reconocido como una obligación en el sistema del Derecho Internacional general, por lo cual toda vulneración o violación de un compromiso internacional que haya producido daño hace surgir un deber de repararlo íntegra y adecuadamente. El derecho internacional establece que quién un acto u omisión estatal que viole un convenio u obligación internacional debe cesar el daño, así como el Estado incumplidor debe reparar el daño causado por sus actos ilegales. Se refiere a jurisprudencia del año 1927 de la Corte Permanente de Justicia Internacional que se pronunció sobre la obligación que pesa sobre los estados de resarcir los daños ocasionados a personas, sean estas nacionales o extranjeras, fijando además, un estándar de reparación estableciéndose que en el caso de daño, las reparaciones necesarias deberían “hasta donde sea posible, limpiar todas las consecuencias del acto ilegal y restablecer la situación que, según toda probabilidad habría existido si el acto no se hubiera cometido (...)”.

Sostiene que al respecto ha sido uniforme la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia al declarar expresa verbis que: “es un principio del derecho internacional que el incumplimiento de un compromiso conlleva la obligación de reparar en forma adecuada”. Agrega que, la más precisa configuración de la responsabilidad internacional en el Derecho Internacional Público ha sido formulada por la **Comisión de Derecho Internacional** uno de los principales órganos jurídicos de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal expreso consiste en: “impulsar el desarrollo progresivo del Derecho Internacional y su codificación”. Se remite a los artículos 1 y 2 del



Proyecto de artículos sobre Responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, que transcribe, asimismo, cita jurisprudencia del ex Magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y profesor Asdrúbal Aguiar y añade que, la obligación internacional de los Estados de reparar en caso de incurrir en ilícitos internacionales es, entonces, un principio general del derecho internacional público, que aparece también en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDDHH), reforzado por la primacía de la persona que caracteriza a estas normas. Este carácter especial de los tratados sobre derechos humanos ha sido destacado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y transcribe declaración a ese tenor. Señala que esa norma debe interpretarse a la luz de los artículos 31 y siguientes de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, lo que implica que las obligaciones internacionales deben interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos. Además, sostiene que, debe tomarse en consideración el Principio Pro homine, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Sostiene que, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho a un recurso efectivo y a la reparación cuando haya habido una violación del Pacto, para satisfacer las exigencias del Primer Protocolo Facultativo. Se remite a lo declarado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la Observación General N° 31, vinculante para el Estado de Chile que transcribe y menciona que la misma obligación internacional fluye del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (también llamado Convenio Europeo de Derechos Humanos o CEDH) en su artículo 5, consagrando el derecho a una reparación en casos particulares, así como en una hipótesis general, a saber, la violación del Convenio o de sus Protocolos, transcribiendo el artículo 41 del Convenio Europeo. Cita y transcribe el artículo 63 de la **Convención Americana sobre Derechos Humanos** el que consagra el mismo principio. Indica que, de toda la jurisprudencia referida, se ha plasmado que toda violación de una obligación internacional comporta el deber de ser reparada adecuadamente. Al respecto, señala que “reparación” es el término genérico que comprende las diferentes formas en las que el implicado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido, ya



sea, restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, con todo la finalidad debe ser la plena restitución del daño. Concluye que, por lo antes señalado, particularmente lo señalado en el citado artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y todas las normas convencionales que ayudan a integrar su contenido, conducen a la conclusión forzosa de que corresponde al Estado de Chile otorgar reparación a toda persona que haya sido víctima de un crimen contra el Derecho internacional. Dicha obligación de reparar alude a los diversos medios con que cuenta el Estado para liberarse de la responsabilidad derivada del hecho internacionalmente ilícito, y que podrían básicamente resumirse en las tres modalidades de satisfacción, la restitución y la indemnización o resarcimiento. Mientras que la satisfacción es la forma adecuada de reparación de los perjuicios no materiales, la restitución (o compensación por equivalencia en su caso) y la indemnización operan esencialmente en el campo de los daños patrimoniales causados. Por lo tanto, insiste, el Estado está obligado a resarcir el daño causado.

Bajo el subtítulo **1.1.1 Relación de programas administrativos y otras medidas de reparación en la definición de las reparaciones dispensadas por la Corte IDH**, expresa que la Corte también se ha pronunciado respecto de la relación de los programas administrativos y otras medidas de reparación en relación al deber de reparación de violaciones a los derechos fundamentales. Indica justificar el presente apartado por el recurso abusivo y dilatorio que la Defensa Fiscal que utiliza con regularidad para tratar de decir que existiría alguna excepción de pago por los gravísimos crímenes cometidos, pese a que no hay fundamento jurídico para sostener esto, además de ser una tesis profundamente inmoral e injusta que continúa siendo defendida en democracia. Indica que, no es raro que Estados responsables de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en dictaduras o en conflictos armados internos hayan buscado programas de reparación a las víctimas. Al respecto señala que la Corte ha reconocido la contribución de las comisiones de verdad, sin embargo, esta “verdad histórica” “no puede sustituir la obligación del Estado de lograr la verdad a través de los procesos judiciales”. Respecto de la obligación de indemnizar perjuicios la Corte “ha examinado el cumplimiento de “criterios de objetividad, razonabilidad y efectividad para reparar adecuadamente las violaciones”. Menciona que, en otro caso, la Corte discutió el valor reparador de medidas ejecutadas por el Estado, al señalar que: “no puede confundirse la prestación de los servicios sociales que el Estado brinda



a los individuos con las reparaciones a las que tienen derecho las víctimas de violaciones a los derechos humanos en razón del **daño específico** generado por la violación”.

Bajo el subtítulo que nombra **1.1.2 El derecho de reparación a las víctimas**, refiere que el derecho de reparación a las víctimas ha sido consagrado en diferentes instrumentos internacionales relativos a los derechos los afectados por graves crímenes internacionales, entre ellos, menciona la adopción en 1985 de la Declaración sobre los “Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder”; por los órganos de Naciones Unidas la adopción de otras declaraciones de similar sentido, el “Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad” y los “Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones”. Indica que, en estos instrumentos se establecen diversos acuerdos de la comunidad internacional en lo relativo a la reparación de víctimas.

Siguiendo y bajo el subtítulo que llama **1.1.3 El derecho a la reparación de las víctimas de tortura**, argumenta que, en lo relativo al crimen internacional de tortura, la **Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes** establece también el derecho a la reparación en su artículo 14, el que transcribe y menciona que, el máximo intérprete de esta **Convención es el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas**, el cual ha precisado, explicado y aclarado la forma en que debe entenderse la citada disposición legal.

Luego, bajo el subtítulo **1.1.4 La reparación en el Estatuto de Roma (art. 75) el caso de los crímenes internacionales de mayor gravedad**, sostiene que, la importancia de una adecuada reparación se muestra como principio del derecho internacional al reconocer la importancia que ha adquirido, en instrumentos como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional . Precisa que el artículo 75 del Estatuto reconoce por primera vez el derecho a la reparación ante un tribunal penal internacional, sobre la base del rol restaurativo que debe tener la justicia. Tal como los crímenes de competencia de la Corte no prescriben, la posibilidad de reparación por los mismos, tampoco. La reparación en sentido integral es considerada un factor clave, tanto por su significación para las víctimas como para la comunidad



internacional. Sostiene que enfática ha sido la Corte reconociendo lo antes indicado en sus resoluciones.

En seguida, bajo el subtítulo que nombra **1.1.5 Conclusión: Existe obligación de reparar de acuerdo a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile**, expone que, el Derecho Internacional, tanto a partir de normas consuetudinarias como convencionales, ha establecido que un hecho ilícito internacional genera la responsabilidad del Estado y la consiguiente obligación de reparar el daño, al concurrir los **requisitos** señalados: **a) Violación de una obligación internacional:** Se ha vulnerado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, y en general todos los instrumentos de Derecho internacional convencional, y el Derecho internacional imperativo, referidos a las graves violaciones a los derechos humanos caracterizadas como crímenes contra la humanidad. **b) El autor o autores de la violación deben ser agentes del Estado:** De los hechos surge claramente que las torturas, y en general todos los daños, penurias y sufrimientos denunciados han sido cometidos por agentes públicos llevando a cabo una “política de Estado”, o la misma, en su caso, fue tolerada por el Estado.

Continúa bajo el subtítulo que titula **1.2.- La responsabilidad del Estado y la obligación de reparar en el derecho Chileno. 1.2.1.- La responsabilidad del Estado en la Constitución Política vigente**, señalando que la responsabilidad del Estado, consagrada en las Actas Constitucionales números 2 y 3, en la Constitución de 1980, y en la actual constitución reformada, reconoce claros antecedentes en la Constitución Política de 1925, vigente a la época de estos actos ilícitos. Refiere que, desde otra perspectiva, es necesario revisar la responsabilidad del Estado en el marco de la legislación actualmente vigente, atendido el principio de vigencia in actum de normas ius publicistas del Derecho Administrativo. La responsabilidad del Estado está encuentra su fundamento en las normas de Derecho Público, y en primer término en la Constitución Política de la República (en adelante, la Constitución), al efecto cita el artículo 38 y añade que ese precepto consagra una **acción constitucional** para hacer efectiva la responsabilidad del Estado, estableciendo dicha disposición un mecanismo de reparación de los daños producidos por la Administración a los particulares, sistema que se caracteriza fundamentalmente por ser de carácter directo, es decir, la acción de reparación del particular afectado se hace efectiva en el patrimonio Fiscal cuando los



organismos que causaron el daño, como en el caso de autos, actúan bajo la personalidad jurídica del Estado. El fundamento básico de esta **responsabilidad extracontractual del Estado**, está en diversas disposiciones constitucionales y legales citando al efecto el inciso 4° del artículo 1 de la Carta Fundamental, que señala el principio dogmático de servicialidad, principio que reconoce explícitamente el carácter preferente de la persona en la Constitución, por ello, cualquier actuación que realicen los órganos del Estado deben ir en beneficio o estar enfocado en la persona. El Estado no es una entidad neutral desde el punto de vista de los Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado, sino que es su deber asegurar y garantizar el ejercicio de estos derechos. Por ello, el Estado no sólo debe reconocer los derechos fundamentales sino que también debe promoverlos; se le impone una actitud positiva frente a la vulneración de las garantías constitucionales, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida y la integridad física y psíquica establecida en el primer numeral del artículo 19 de la Constitución. A mayor abundamiento, se remite al inciso 2° del artículo 5°, artículo 6 y 7 de la Constitución. En ese sentido, se remite al: artículo 4° de la ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración que transcribe; al artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, añadiendo que dichas normas apuntan a la **Responsabilidad De Los Órganos Del Estado**, y agrega que ese cuerpo de normas es el que ha generado el “**Estatuto de la responsabilidad extracontractual del estado**”, del que surge el principio informador de ese estatuto, según el cual todo daño ocasionado por el Estado, sin excepción, debe ser indemnizado.

Bajo el subtítulo **1.2.2.- Naturaleza de la Responsabilidad del Estado**, indica que, la naturaleza de esa responsabilidad extracontractual es de derecho público y se remite a jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, añadiendo que la misma, excluye la aplicación de normas civiles a los casos en que se hace efectiva la responsabilidad del Estado y también se remite a jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, agregando que es un hecho indiscutido que el Estado ha de responder en los casos en que sus agentes con o sin instrucciones llevan a cabo delitos de lesa humanidad y de esta manera, la responsabilidad del Estado no solo es solidaria por los hechos de sus agentes, sino que, además, está regida por el derecho público y no por el derecho privado. Sostiene que, respecto a la naturaleza misma de esa responsabilidad extracontractual en materia de derechos humanos, el criterio rector en cuanto a fuente de la responsabilidad



radica en el art. 5° de la Constitución Política de la República. Se refiere a los elementos básicos que establece la doctrina en materia de responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos.

Bajo el subtítulo **1.3.- El Estado ha hecho reconocimiento de su responsabilidad**, señala que, el Estado de Chile, mutuo propio, ha reconocido su responsabilidad en estos hechos en forma expresa a través del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación donde queda constancia de la sistematicidad de las graves violaciones a los derechos humanos y la represión en la Región de O'Higgins. Por su parte el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura **reconoce a la parte demandante como víctima de la práctica institucional de la tortura** lo cual debe servir como demostración del reconocimiento del Estado de su responsabilidad. También lo ha hecho por medio incontables de declaraciones y reconocimientos de responsabilidad a través de los Jefes de Estado, del Poder Judicial en sus sentencias, del Instituto de Derechos Humanos, en sus informes, por lo cual, incluso desde la lógica iusprivatista, operaría la renuncia a la prescripción expresa y tácitamente. Se remite luego a jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en autos caratulados "Prats Cuthbert Sofía - Prats Cuthbert María - Prats Cuthbert Hilda/ Contreras Sepúlveda Juan Espinoza Bravo Pedro – Iturriaga Neumann Raúl", de todo lo cual se reconoce por la jurisprudencia chilena el hecho de que una vez determinada la responsabilidad del Estado por una lesión sufrida por un particular, esta responsabilidad genera un deber de reparación total, cuestión que se tratará en el apartado siguiente.

Bajo la denominación **2.- Daño sufrido: El demandante fue víctima de graves violaciones a los derechos humanos, en particular de crímenes de lesa humanidad**, sostiene que, el concepto de crímenes de lesa humanidad corresponde, al menos desde 1945 a una categoría dogmático-jurídica bien identificable, esos crímenes requieren un contexto de violencia organizada que permite diferenciarlos de aquellos actos delictivos que consisten en la mera lesión de bienes jurídicos individuales. En efecto, el llamado "elemento de contexto" establecido por el Derecho Penal Internacional distingue los delitos comunes-nacionales, de los crímenes internacionales. Así, ciertos delitos o crímenes, por su particular y excepcional gravedad, agreden y hieren no solamente a sus víctimas, sino también a la conciencia misma de la humanidad. Violan el respeto a la dignidad humana, ese fundamento común que deben regir la vida de las naciones civilizadas, transgrediendo los



propósitos y principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Es por ello que han sido calificados como **crímenes de lesa humanidad**. Luego se remite a jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que consagran la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad

Refiere que los hechos ilícitos denunciados en la presente causa, y probados de acuerdo a las Comisiones Rettig y Valech, deben ser considerados como crímenes de lesa humanidad por las características con las que fueron llevados a cabo y por el daño causado. Resalta que, **estos hechos formaron parte de un ataque sistemático y** generalizado contra una población civil y sus ejecutores tenían conocimiento de que se estaba llevando adelante dicho ataque.

Bajo el subtítulo **2.1.- El demandante fue crimen de lesa humanidad de tortura** expone que la práctica de la tortura tiene un alto componente repulsivo y despierta tal nivel de rechazo que la comunidad internacional acepta, por ejemplo, la pena de muerte en algunos casos, pero jamás la tortura. La tortura, no sólo corresponde a un delito preceptuado en el Código Penal chileno, sino que tiene un segundo carácter, que trasciende el derecho interno de los Estados, como grave violación a los derechos humanos, bajo las modalidades de crímenes contra la humanidad, y crímenes de guerra. Los derechos humanos representan exigencias jurídicas pero también morales, atendiendo el desarrollo cultural logrado por la humanidad, producto del horror del siglo XX. Menciona que, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su art. 5º proclama: “Nadie será sometido a torturas, y a penas o tratos crueles, inhumanos y/o degradantes” y a fin de aplicar este principio se han dictado una multitud de normas internacionales que prohíben y combaten la tortura, en distintos ámbitos, así se cuenta con los siguientes instrumentos internacionales relacionados con la lucha contra la tortura: (a) **El art. II(b) de la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio de 1948;** (b) Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales, relativos al Derecho Humanitario de los conflictos armados, donde se define la aplicación de la tortura como una infracción grave y se le instituye como crimen de guerra, con un régimen especial respecto de la prescripción, la amnistía y la existencia de deberes de punición por toda la Comunidad Internacional; (c) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, (d) la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969; (e) La Declaración Sobre Protección a Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas



Cruels Inhumanos o Degradantes, adoptado por Resolución N° 3452 del 9 de diciembre de 1975, que es el precedente de; (f) la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes de 1984; (g) la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985; (h) la tortura configura un crimen internacional de competencia de la Corte Penal Internacional, sea como genocidio, crimen de lesa humanidad, o como crimen de guerra, ; (i) además de ser una prohibición de ius cogens. Se remite luego a disposiciones de la Convención contra la Tortura, que es el instrumento por excelencia para la configuración del crimen en comento. Añade que, a tortura se configura por la concurrencia de tres requisitos: (a) La causación de sufrimiento, punto acreditado; (b) Por la participación de agentes estatales o para estatales, punto acreditado y; (c) Que esta sea cometida con determinados fines a saber: Obtener de la víctima o de un tercero información o una confesión, como ocurre en la especie, muchas veces intentando obtener confesiones sobre hechos que sabían falsos; Castigar a la víctima o un tercero por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido. En este caso la tortura fue un arma de represalia o castigo que se aplicó en todos los centros de detención que profusamente en la región. Todas aquellas personas que eran consideradas militantes de partidos de izquierda, tenían vinculación con el movimiento sindical, o quienes por cualquier razón fueran considerados enemigos del gobierno de facto, sufrieron la aplicación de tortura. **Todos los hechos objeto de denuncia configuran la tortura en el sentido más exigente.**

Bajo el subcapítulo que denomina **3. Por los crímenes y otras graves violaciones a los derechos humanos enunciados, expresa que el demandante sufrió daños gravísimos**, refiere que, la tortura y los padecimientos físicos dejan secuelas físicas, mentales y psicosomáticas para toda la vida y que establecida la procedencia del derecho a la reparación, cabe entrar a analizar el daño moral, indicando que **el Código Civil** no contiene una definición general de daño, limitándose en materia contractual a clasificar los daños patrimoniales (artículo 1556 CC), y en materia de delitos y cuasidelitos haciendo simple referencia al “daño”. Menciona que resulta necesario, sino imprescindible interpretar el concepto. Al respecto cita doctrina de don Arturo Alessandri Rodríguez y del profesor Enrique Barros. Añade que, el daño moral alude correctamente a la lesión de bienes como el honor o la privacidad, pero también expresa imperfectamente, otros daños no patrimoniales de significación, como por ejemplo el dolor físico, la angustia psicológica o la



pérdida de oportunidades para disfrutar una buena vida. Expresa que para el caso, se satisface la idea nacional de daño moral, toda vez que es innegable que el daño sufrido como consecuencia de estos gravísimos crímenes causa dolor físico, aflicciones mentales, y privación de los agrados y placeres de la vida. Luego, se remite a definiciones conceptuales tales como la indemnización derivada del daño moral, creadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agregando que la Corte reconoce la existencia de un derecho a la reparación de la víctima como un derecho consagrado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que se presume en el caso de gravísimas violaciones a los más elementales derechos humanos.

Luego, en el subtítulo **3.1 Extensión del derecho a la reparación integral de las víctimas en caso de violación de derechos humanos**, cita al efecto, doctrina de Gonzalo Aguilar Cavallo de su obra “Crímenes internacionales y la imprescriptibilidad de la acción penal y civil: referencia al caso chileno y sostiene que, la indemnización de daño moral, se encuentra en el hecho de que además de los daños físicos y materiales sufridos, se encuentra un daño moral directo derivado de las siguientes circunstancias que rodearon el hecho fundamental del golpe de Estado: a) amenazas; b) incomunicación; c) persecuciones; d) exoneración laboral; e) negativa de acceso a la información; f) inseguridad; g) presiones y daños psicológicos; h) alteraciones del sueño; i) aislamiento social; j) pérdida de oportunidades, en particular de empleo, educación y prestaciones sociales; k) otras secuelas en el seno de la familia, como separaciones forzosas de largo tiempo; separaciones definitivas, destrucción de la familia, daños que permanecen incólumes pese al transcurso del tiempo. Hace presente que, respecto a la **extensión del derecho a la reparación integral**, se refiere la Convención Americana sobre Derechos Humanos y añade que, en el presente caso corresponde una reparación como consecuencia del accionar del Estado en delitos de lesa humanidad perpetrados por el Estado. Luego, se remite a jurisprudencia nacional, sentencia dictada en los autos rol N° 672-2011 de la Tercera Sala de la Corte Suprema, transcribiendo los considerandos pertinentes a la materia y concluye que, en definitiva, **el derecho a una reparación integral es un derecho reconocido por el derecho internacional y derivado del bloque constitucional de derechos humanos chileno**, en tal sentido, al no poder volver las cosas al estado anterior al a vulneración de los derechos, queda la opción de repararla, lo que se ve reforzado por el principio pro homine, que, implica que se debe interpretar el ordenamiento jurídico interno de manera tal



que se amplíe el crisol referido a este derecho y, por lo tanto, se debe garantizar por todos los órganos del Estado.

Resume que, por concepto de daño moral, para intentar compensar el sufrimiento causado por el secuestro, tortura física y psicológica, sufriendo represión política y persecución durante la dictadura, por el sufrimiento grave y la angustia que esa experiencia le ha causado a su representado, solicita al Tribunal la suma de \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos), con reajustes e intereses.

Bajo el subtítulo que denomina **4. Las acciones que emanan de la comisión de crímenes contra la humanidad son imprescriptibles** sostiene que, la acción destinada a obtener indemnización de perjuicios derivados de la comisión de delitos de lesa humanidad es **imprescriptible**, al igual que la acción penal. “Los crímenes de lesa humanidad, calificación atribuida a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar en Chile, son de carácter imprescriptible, siendo excepción a la institución de la prescripción extintiva. Refiere que, tal característica no es solo privativa del orden penal, sino que también alcanza a la acción civil que surge de tales ilícitos, pues otorgar reparación civil a las víctimas dota de operatividad a los derechos humanos y da respuesta a la obligación que compete al Estado de reparar de forma integral a los afectados. Al efecto, se remite a jurisprudencia de la Excm. Corte Suprema en causa Rol N° 4024-2013 y de la Itma. Corte de Apelaciones en fallo de fecha 17 de noviembre de 2014 de causa Rol N° 5270-2013 y a doctrina del tratadista don Gonzalo Aguilar Cavallo.

Luego, bajo el subtítulo **4.1 Principio de Derecho Internacional Convencional**, se remite al artículo 29 del Estatuto de la Corte Penal Internacional que transcribe y añade que, en esa norma no **distingue entre acción penal y acción civil** (aquella referida a obtener la indemnización de perjuicios derivado de delitos). Sostiene que reafirma lo antes indicado lo dispuesto en el artículo 75 del mismo Estatuto que transcribe y explica que, no se hace distinción entre las acciones imprescriptibles, estableciéndose como tales tanto acción la penal como aquella que busca obtener la indemnización por los perjuicios derivados de delitos de lesa humanidad. Advierte que, más aun, se consagra el principio de reparación de la víctima.

A continuación, bajo el subtítulo que nombra **4.2 Principio de Coherencia** refiere que, en virtud de un principio sistemático y coherente del ordenamiento jurídico, se deduce que la acción para obtener la indemnización de perjuicios derivados de delitos de lesa humanidad no prescribe, es una



inferencia que se condice con dos principios de interpretación; “donde el legislador no distingue, no corresponde al intérprete distinguir” y “a la misma razón, misma disposición”, en este sentido, al no distinguirse entre acciones que no prescriben, no corresponde al juez determinar que una acción si prescribe y la otra no.

Luego, bajo el nombre **4.3.- Enfoque Centrado en las Víctimas y en la Humanidad**, hace presente que cobra relevancia en la presente materia el principio *pro homine*, principio que indica, es definido como “un criterio hermenéutico que informa los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Refiere que, ese principio coincide con el rasgo fundamental de los derechos humanos, cual es, estar siempre a favor del hombre. Al respecto cita doctrina de Ximena Medellín y agrega que, no se puede regir, en ningún caso, las acciones destinadas a obtener la reparación (indemnización) de perjuicios derivados de la comisión de ilícitos de lesa humanidad de acuerdo a normas del Derecho Civil interno y ello destaca, **no solo porque es una responsabilidad de Derecho Público, y por lo tanto, no corresponde la aplicación de normas de Derecho Privado, sino que además, los derechos humanos se rigen por principios derivados de un orden jurídico internacional que exigen una interpretación amplia de los mismos.** No se debe restringir el ejercicio de estos derechos, incluyendo el derecho a la reparación integral, por interpretaciones basadas en derecho interno.

Señala que en otras palabras, existe un derecho a ser resarcido íntegramente por los actos ilícitos cometidos por el Estado, es decir, un derecho a indemnización por estos actos, y **no se puede vulnerar tales derechos en virtud de interpretaciones restrictivas derivadas del derecho interno.**

En seguida, en el subtítulo que nombra **4.4 Principio Finalista**, se remite a la doctrina de Gonzalo Aguilar Cavallo, quien se refiere al principio finalista como criterio interpretativo y completa indicamos que, si se acepta la idea de la prescripción de la acción indemnizatoria de perjuicios derivados de delitos de lesa humanidad, no se cumpliría con los **finés de derecho internacional** relativos a la persecución de tales delitos e incrementa indicando que, en razón de cumplir con la finalidad de la persecución de



crímenes de lesa humanidad, se debe reparar el daño causado a las víctimas de tales delitos, de lo contrario, se cae en el absurdo de que se puede cometer delitos contra derechos humanos y, aun siendo estos perseguidos, no repararse el daño.

Inmediatamente, bajo el subtítulo **4.5. Principio de la Reparación Integral**, indica que el presente principio también refuerza la idea de imprescriptibilidad de la acción civil derivada de delitos de lesa humanidad y que, el criterio de imprescriptibilidad de la acción destinada a obtener la indemnización de perjuicios ha sido **recogido por nuestra jurisprudencia** también. Cita al respecto, la jurisprudencia en recurso de casación de la Corte Suprema, en autos caratulados “Ortega Fuentes, María Isabel con Fisco de Chile”, juicio ordinario sobre indemnización de perjuicios, por sentencia emanada del Vigésimo Primer Juzgado Civil de Santiago, en que se acogió la excepción de prescripción de la acción, y en consecuencia se rechazó la demanda en todas sus partes. Extiende lo anterior, señalando que, así como los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, lo son también las acciones reparatorias que surgen de tales delitos y se remite a jurisprudencia del fallo de la Corte de Apelaciones, Rol 6581- 2012, caratulado “Prats Cuthbert Sofía - Prats Cuthbert María - Prats Cuthbert Hilda/ Contreras Sepúlveda Juan - Espinoza Bravo Pedro – Iturriaga Neuman Rau”, transcribiéndolo parcialmente.

A continuación, indica en el subtítulo **4.6 La imprescriptibilidad de la acción de reparación es, por tanto, un principio que deriva del estricto apego al Derecho Internacional de los Derechos Humanos** que, de acuerdo a todos los argumentos anteriormente analizados hay un principio de imprescriptibilidad de la acción destinada a obtener la indemnización de perjuicios derivados de delitos por lesa humanidad y que esta **imprescriptibilidad se basa no solo en el derecho internacional, sino también en principios de carácter interno, internacional** y por la misma jurisprudencia de la Corte Suprema. Al efecto, se refiere a doctrina del jurista Zegvelt, del legislador e internacionalista don Andrés Bello, del jurista latinoamericano, penalista, catedrático y ex Magistrado de la Corte Suprema Argentina, don Eugenio R. Zaffaroni y complementa sosteniendo que, una interpretación coherente con los derechos fundamentales, con el hecho de que no sólo debe buscarse su literalidad, sino también entender cuál es el fundamento de los mismos, que en último término persigue una razón de humanidad, y no una “razón de Estado”, que es –básicamente- lo que invoca el



Estado cuando no tiene razón. Entender la imprescriptibilidad de la acción reparatoria es la única medida que considera adecuadamente gravedad de los crímenes perpetrados, y las graves consecuencias sufridas. Entender lo contrario es favorecer la injusticia.

Continúa refiriéndose bajo el subtítulo que denomina **5. La jurisprudencia se inclina por la reparación en materia de derechos humanos**, que esas resoluciones prestigian a la judicatura y toman cabal cuenta del daño generado por estos crímenes, y de la tremenda injusticia que generaría declarar que la acción prescribe de acuerdo al Código Civil, en un régimen pensado para el acreedor “negligente” en materia de accidentes, lesiones y contratos cotidianos. No es una institución pensada para quien sufrió el ejercicio cruel e implacable del terrorismo de Estado.

Finalmente, y bajo el subtítulo que denomina **6. Resumen de la concurrencia de los requisitos para indemnizar** señala que, en el caso ad litem se dan todos los requisitos que obligan al Estado a indemnizar los perjuicios causados: **1) Existencia de una acción u omisión de un órgano del Estado** y en este caso, específicamente por agentes del estado, en el contexto de un genocidio, mediante la perpetración de crímenes lesa humanidad contra opositores, represión política, persecución, violencia, tortura y muerte. No hubo procedimientos racionales, justicia, legalidad ni misericordia. Enfatiza que **el hecho criminal cometido contra quien representa es imputable al Estado de Chile, puesto que fue un órgano de su administración el que actuó y debe entenderse que ha actuado el Estado como tal.** **2) Existencia de un daño**, por el sólo hecho de haberse producido un crimen internacional que afecta gravemente los derechos humanos el daño se presume, especialmente el daño moral y corporal. Indica que, sin perjuicio de lo anterior, y como el resultado es evidente, este daño se probará también en la etapa procesal pertinente. **3) Nexos causal.** El daño a las víctimas emana, justamente, de la perpetración del delito. Es la política genocida de la dictadura cívico-militar la que requirió alimentarse de la muerte de personas para imponer un sistema a sangre y fuego. Fue así como a consecuencia de un sistema que buscaba vulnerar derechos fundamentales, se causaron los más crueles sufrimientos. **4) No existen causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad en este caso.** Asegura que, corresponde entonces que, el Estado que ha incumplido los deberes jurídicos más esenciales, que por ser mandatos de justicia se corresponden con la tradición del ius cogens, y con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, deba



al menos reparar. El Estado de Chile, debe así intentar dar cumplimiento al tercer y último de los deberes jurídicos, “**dar a cada uno lo suyo**” (suum cuique tribuere) o compensar de forma imperfecta, pues el daño verdaderamente causado fue irreparable.

SEGUNDO.- Que, el demandado por presentación de folio 6, **contestando la demanda** deducida en su contra, solicita su completo rechazo, con costas, conforme a las excepciones y defensas que expone.

Expone inicialmente en su apartado **I.) SÍNTESIS DE LA DEMANDA** que, la actora expresa en su demanda que su representado fue detenido por Carabineros el día 20 de Septiembre de 1973 desde su lugar de trabajo, que correspondía al Asentamiento Tanume que nació de la toma del Fundo Aspillaga, luego trasladado hasta la Comisaría de Carabineros de Pichilemu, lugar en que fue estuvo detenido y sometido a torturas durante dos días, para luego ser puesto en libertad con su vista vendada. Señala que fue reconocido como víctima de prisión política y tortura en el Informe N° II por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”, con el número 6130. Invocan como fundamento jurídico de su acción dirigida en contra del Fisco de Chile, diversas disposiciones de la Constitución Política de 1980; la ley 18.575 sobre Bases de la Administración del Estado, la Convención Americana de Derechos Humanos; y, general, las disposiciones del complejo normativo denominado “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, y una recopilación de fallos sobre la materia, todo lo cual configuraría a su entender, una responsabilidad extracontractual imprescriptible del Estado.

En seguida, y bajo el apartado **II.) EXCEPCIONES, ALEGACIONES Y DEFENSAS**, contesta la demanda de autos oponiendo las siguientes excepciones, alegaciones y defensas.

II.1) EXCEPCIÓN DE REPARACION INTEGRAL. IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN ALEGADA POR HABER SIDO YA INDEMNIZADO EL DEMANDANTE. Opone el demandado a la acción deducida, la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el actor. Bajo el subtítulo que denomina **II.1.1 Marco general sobre las reparaciones ya otorgadas**, sostiene que no resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. Refiere que, en efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior –y desde– lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada



“Justicia Transicional”, pues sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria. Agrega que, en efecto, el denominado dilema **“justicia versus paz”** es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Menciona que argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. Prosigue señalando que, bajo esa perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema. Por otro lado, no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Rememora que el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Ese concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación. Esos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En ese sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Agrega que basta para ello revisar las discusiones originadas en la aprobación de nuestra ley N° 19.123, para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. Indica que no debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

A continuación, bajo el subtítulo **II.1.2 La complejidad reparatoria**, expresa que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del Presidente Patricio Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron



(a) *el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados: y, (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse*"⁵. Complementa indicando que, en lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de *"propuestas de reparación"* entre las cuales se encontraba una *"pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas"* y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, *"reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas"*.

Agrega que, por su parte, y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación el Ejecutivo, siguiendo el referido Informe de la comisión, entendió por reparación *"un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe"*. A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en *"un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas"*. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Destaca que, la idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover *"la reparación del daño moral de las víctimas"* a que se refiere el artículo 18 y que asumida esa idea reparatoria, la Ley 19.123 y, las demás normas conexas (como la Ley 19.992, referida a las víctimas de torturas) han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo el país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.

Refiere, que, en ese orden de ideas, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a)



Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

Luego, en el subtítulo **II.1.3 Reparación mediante transferencias directas de dinero**, expresa que diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también, a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos. Destaca que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones, por un lado, quienes sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras aparecieron otros que abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Ambas modalidades tendrían fines innegablemente resarcitorios.

Detalla que, en términos de costos generales para el Estado, ese tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2015, en concepto de: A) Pensiones: la suma de \$199.772.927.770.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig); B) Pensiones: \$419.831.652.606.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); C) Bonos: la suma de \$ 41.856.379.416.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$22.205.934.047.- por la ya referida Ley 19.992; y D) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.- E) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$ 21.256.000.000.- **En consecuencia, a diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.-**

Reitera señalando que, desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Explica que el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar y que resultan una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

En seguida, bajo el subtítulo que denomina **II.1.4 Reparaciones específicas. Ley 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y**



torturados políticos, asegura que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N° s 19.234 y 19.992 y sus modificaciones. Agrega que, la Ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo **“Listado de Prisioneros Políticos y Torturados”** de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas. Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Informa que, adicionalmente, cabe consignar que el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.-, por lo que de esa forma, el demandante ha recibido, hasta la fecha, los beneficios y montos contemplados en las leyes de reparación mencionadas.

Hace presente que en ese sentido, a la fecha de la contestación de la demanda, don **Augusto Olguín González**, según lo informado por el Instituto de Previsión Social, figura calificado como víctima de Prisión Política y Tortura en el segundo informe emitido por la Comisión Valech en el año 2011, por lo que le asiste derecho a los beneficios de reparación dispuestos en las Leyes N°s 19.992 y 20.874.

Informa que, en concreto, y conforme a lo informado por el Instituto de Previsión Social, el total de lo percibido por el demandante corresponde a los siguientes montos:

-Pensión Ley 19.992 Períodos 01/10/2011 al 30/05/2018: **\$ total 14.234.139**

-Aguinaldo del Período **\$ 230.329**

- Aporte Único Ley N° 20.874 **\$ 1.000.000**

Monto Global percibido al 30/05/2018 \$ 15.464.468.-

A continuación y bajo el subtítulo que denomina **II.1.5 Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas**, refiere que, tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase. En ese sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 **como de la Ley 19.992**, el **derecho a gratuidad en las prestaciones médicas** otorgadas por



el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Explica que, para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad, cuentan con un equipo PRAIS12 en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios. A nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2014, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$4.580.892.-, presupuesto que se distribuye por Servicio de Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones que requieren beneficiarios en el extra sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992.- Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios FONASA; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos. Revela que, se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Da a conocer que, de igual forma, igualmente se incluyeron **beneficios educacionales** consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores. El organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. Señala a modo de ejemplo un hijo o nieto del beneficiario, y siempre que el beneficiario original no hubiese hecho uso de él, ha podido postular a las becas Bicentenario, Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio o a las establecidas para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de pedagogía, en la forma y condiciones que establece el



reglamento de dichas becas. Termina indicando que, asimismo, se concedieron **beneficios en vivienda**, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

Continúa señalando bajo el subtítulo que denomina, **II.1.6 Reparaciones simbólicas** que al igual que todos los demás procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH. se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor –siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral. Sostiene que, la doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables. Luego, refiriéndose a la naturaleza de la reparación del daño extrapatrimonial, se remite a doctrina de Fuego.

Señala que, en la compleja tarea de entregar una compensación satisfactiva se destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como las siguientes: a) La construcción del *Memorial del Cementerio General en Santiago* realizada en el año 1993; b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del *Día Nacional del Detenido Desaparecido*. Se elige el día 30 de agosto de cada año en atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha instituido este día como día internacional del detenido desaparecido; c) La construcción del *Museo de la Memoria y los Derechos Humanos*. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, íconos, documentos o monumentos. d) El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del *Premio Nacional de los Derechos Humanos*; e) La construcción de *diversos memoriales y obras* a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras. Destacan, el “*Memorial de los prisioneros de Pisagua*” en el Cementerio de esa ciudad; el Mausoleo “*Para que nunca más*” en el Cementerio 3 de Iquique; el Memorial “*Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia*” en las afueras del Cementerio



Municipal de Tocopilla; el Memorial "*Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama*" en el camino a San Pedro de Atacama; el Memorial en homenaje a 31 víctimas de Antofagasta en la puerta principal del Cementerio General de la ciudad; el "*Memorial en homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de Atacama*" en el Frontis del Cementerio Municipal de esa ciudad; el "*Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos*" en la Plaza de Armas de Curacaví; el "*Memorial a las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas del Partido Socialista*" en la sede de este partido; el "*Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca*" en esa ciudad; y el "*Memorial Escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas*" en el Cementerio Municipal de esa ciudad. Todos ellos unidos a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

A continuación, expresa en el subtítulo que nombra **II.1.7 La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas** que, de todo lo antes expresado puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con la realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales, como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los D.D.H.H., por ello, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente. Sobre ese punto cita como jurisprudencia el fallo *Domic Bezic, Maja y otros con Fisco* y agrega que en dicho fallo se afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 y menciona que ello ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013, que reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos. Agrega en ese sentido que, diversas sentencias ya habían insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente "*reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas*", lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la



improcedencia de la indemnización. Indica que en efecto, los órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la **política de reparación** de Violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas. Al efecto, cita el caso Almonacid. Refiere que, en ese mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades. Destaca un documento denominado “Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos” (*Rule of Law For Post-Conflicts States*) el que se ha referido expresamente a los programas de reparación, reconociéndose en él la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial. Indica que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Agrega que ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Refiere que, eso puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos.

Concluye señalando que, estando las acciones interpuestas en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, al tenor de documentos oficiales que indica serán acompañados en su oportunidad y que acreditarán que el demandante ya fue indemnizado a través de las leyes de reparación, oponiendo la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante de la presente causa.

II.2) EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA.

Expresa que, además de la excepción de reparación alegada, opone a la demanda la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida conforme a los siguientes argumentos.



II.2.1. Normas de prescripción aplicables. Opone la excepción de prescripción de la acción de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes. Sostiene que, conforme al relato efectuado por el actor, la detención ilegal, prisión política y tortura que sufrió, ocurrió desde el 20 de Septiembre de 1973. Indica que en el caso de marras entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el **4 de Junio de 2018**, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil, y en consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechacen íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio y en el caso que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, **opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil**, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de las acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Luego, bajo el subtítulo que nombra **II.2.2. Generalidades sobre la prescripción**, sostiene que, por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe y pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Al respecto, invoca que la jurisprudencia ha señalado que *“para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad.”* Repasa sobre la materia que la prescripción es una institución universal y de orden público y que las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general



a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas cita y transcribe el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que sostiene, manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado y agrega que esa disposición legal, consagra con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Completa señalando que, la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1º, del Código Civil) y la a responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.

En seguida, en el subtítulo que denomina **II.2.3 Fundamento de la prescripción**, expone que la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Destaca que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social y está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que, existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas y por las mismas razones precisa que la prescripción no es -en sí misma como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Añade que resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.

Continúa diciendo que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización, sino que, solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción y que, por otro lado, no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la



regulación del Código Civil, lo que habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

Finaliza sosteniendo que, en la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que el demandante estuvo en situación de hacerlo.

Seguidamente en el contenido que nombra **II.2.4 Jurisprudencia sobre la prescripción. II.2.4.1 la sentencia del pleno de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013**

Expone que, como es de público conocimiento, nuestra Excma. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil dictó, el 21 de enero de 2013, una histórica sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 y en dicha sentencia, el Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esa controversia, señalando: 1º) Que el **principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad** de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva (transcribe el citado fallo en sus considerandos respectivos); 2º) Que **los tratados internacionales invocados**, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, **no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil**; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal y transcribe los considerandos pertinentes del citado fallo; 3º) Que **no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común**, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto, y transcribe los considerandos respectivo del citado fallo; 4º) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la



Desaparición del secuestrado (detención del demandante en este caso), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia.

Bajo la denominación **II.2.5 Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria**, refiere que, la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. Indica que, sobre el particular debe considerarse, como en forma reiterada se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

En el subtítulo que denomina **II.2.6 Normas contenidas en el Derecho Internacional**, expresa que, aun cuando el demandante formula alegaciones en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en este sentido, su parte se hará cargo de ciertos instrumentos internacionales, los que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia y entre los cuales cita la “**Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad**”, la que refiere que, a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; agregando que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales; los **Convenios de Ginebra de 1949**, ratificados por Chile en 1951, que se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto el Máximo Tribunal; la **Resolución N°**



3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “*Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad*”, que se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que, no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias; la **Convención Americana Derechos Humanos**, que no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria y en relación a esta Convención destaca que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990. Hace presente, asimismo, que por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultándola para imponer condenas de reparación de daños, pero ello no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción, en Chile, es decir, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a los Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Agrega que, su planteamiento antes expuesto ha sido reconocido por el más alto Tribunal del país y cita al efecto jurisprudencia de la Excm. Corte Suprema que ha desestimado la aplicación de esa normativa, entre ellas, el fallo que conoció del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso N° 1.133-06, caratulados “**Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile**”, de 24 de julio de 2007 y la sentencia que acogió un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco, en la causa “**Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile**”, autos ingreso N° 4.067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007.

Termina señalando que, no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo



tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, esta sentenciadora no debe apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, solicitando el rechazo de la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

Posteriormente, bajo el subtítulo **II.3) EN CUANTO AL DAÑO E INDEMNIZACION RECLAMADA**, indica que, en subsidio de las defensas y excepciones precedentes, formula alegación en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y **al excesivo monto pretendido de \$ 150.000.000.-**

En el subtítulo que denomina **II.3.1 Fijación de la indemnización por daño moral**, hace presente que, con relación al daño moral no se puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá, de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo y de conformidad a los antecedentes que obren en autos en la etapa probatoria del mismo. Menciona que, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente, lo que produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria. Repara que, en términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso, por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva. A dicho tenor se remite a lo expresado por la Excma. Corte Suprema en cuanto a que hay que regular el monto de la indemnización que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Sostiene que, tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen



influencia estas capacidades. No habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. Asevera que, en tal sentido, las idénticas cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral, resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en este materia han actuado con mucha prudencia. Al respecto, se remite a jurisprudencia de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en apelación Ingreso Corte 6891 – 2013, que transcribe en sus considerandos pertinentes, y agrega que dicho tribunal ha resuelto en materia similar a la de autos que, para fijar el quantum debe acudir al Principio de Prudencia que conduce a la proporcionalidad.

A continuación, en el acápite que nombra como **II.3.2 En subsidio de las excepciones precedentes de reparación y prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales**, y en subsidio de las excepciones de reparación integral y prescripción extintiva de las acciones deducidas, alega que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, esta sentenciadora debe considerar todos los pagos recibidos por el actor a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral. Refiere que, de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces. También hace presente que, para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

Luego, en su apartado final que denomina **II.4) IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE REAJUSTES E INTERESES EN LA FORMA SOLICITADA**, hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la



sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada y no como lo pide el actor, esto es, desde la notificación de su demanda. Al efecto, explica que, a la fecha de notificación de la demanda de autos a tramitación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse, lo que implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada. Indica que, el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal, por lo que desde esa perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.

Hace presente que, respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia y se remite luego, a la jurisprudencia de los tribunales superiores, en fallo que aparece en el Tomo 55, sección 1°, página 95, de la revista de Derecho y Jurisprudencia que, así lo han decidido de manera y agrega que, por consiguiente, el hipotético caso de que se decida acoger la acción de autos y condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

TERCERO.- Que, la parte demandante al evacuar el trámite de réplica solicita el rechazo de forma íntegra de los argumentos de la contraria, por los puntos que expone:

I.- Reconocimiento de la demandada respecto de los hechos que fundan la presente demanda, que el Fisco de Chile, conforme el mérito de su contestación, no ha controvertido la condición de víctima de don Augusto Olguín González, ni la exposición de hechos contenidos en la demanda, que dan cuenta del secuestro, prisión política, torturas, y otros crímenes sufridos por quien representa y tampoco su calidad de víctima calificada por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura. Agrega que, la demandada tampoco ha cuestionado la existencia del daño ocasionado producto de estos



crímenes, limitándose a formular la: 1) Excepción de reparación integral. Improcedencia de la indemnización por haber sido ya indemnizado el demandante (II.1). 2) Excepción de prescripción extintiva (II.2). 3) En cuanto al daño e indemnización reclamada (II.3), solicitan su rebaja, compensándola con pagos ya realizados. 4) Improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada (II.4).

Hace presente que, en su libelo se hace cargo de todas y cada una de las excepciones referidas, especialmente los argumentos sobre la supuesta reparación integral, así como las fuentes legales y jurisprudenciales, del Derecho internacional, nacional y normas de *ius cogens* que establecen la imprescriptibilidad de la reparación por ese tipo de crímenes, sin perjuicio de ello, se refiere en particular a la improcedencia de cada una de las excepciones, defensas y alegaciones formuladas.

Prosigue en su acápite que denomina **II.- Improcedencia de la excepción de pago también denominada “excepción de reparación integral”** alegada por la defensa fiscal señalando que, **en** cuanto a la alegación que hace el demandado consistente en aplicar el modo de extinguir las obligaciones “excepción de pago” o, en sus términos “reparación satisfactiva o integral”, en consideración a que la demandante ya habría sido indemnizada por la Ley N° 19.123, así como por los beneficios recibidos por otras normas como la Ley N° 19.992, tal afirmación parece errónea, toda vez que, el principio general es la reparación integral del daño de acuerdo a lo expuesto en la demanda, en cambio, las normas que enuncia la contraria sólo establecen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos de tortura de que fueron víctimas las personas y pretender que una pensión que bordea los \$130.000.- (ciento treinta mil pesos mensuales), definida por el propio Estado como “*austera y simbólica*” es la reparación que mandata el Derecho internacional carece de cualquier asidero. Sin perjuicio de ello, considera digno de nota que el Fisco de Chile reconozca que se produjeron crímenes contra la humanidad y que los mismos causaron un daño moral a la víctima directa que representa.

Sostiene que, el reconocimiento de la demandada del deber de indemnizar, y a la vez alegar prescripción, como hace en el punto (II.2) es un verdadero contrasentido, no obstante ello, la contraria en su escrito de contestación vuelca su empeño argumentativo señalando que, en la discusión de la Ley N° 19.123 el objetivo de este grupo de normas *quedaría* bastante claro. Señala que, en directa relación a lo anterior, la Ley N° 19.123 que el



demandado esgrime como justificación para decir que el daño moral ya está resarcido, en su artículo 2 establece que “Le corresponderá especialmente a la Corporación (...) *Promover* la reparación del daño moral de las víctimas”. La palabra *promover* no es sinónimo de reparar, y en el caso de mi mandante, no se ha reparado íntegramente el daño moral que padece hasta el día de hoy por las brutales torturas padecidas. Lo anterior, porque el sentimiento de injusticia y de no haber sido reparada totalmente subsiste intacto. Redunda indicando que, incluso, si se revisa el tenor literal de la propia Ley N° 19.123, esta no considera incompatibles la pensión de sobrevivencia con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, según el tenor inequívoco de su artículo 24: “La pensión de reparación puede ser compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o pudiere corresponder al respectivo beneficiario”. Entonces, con menor razón podría el intérprete de la ley descartar la procedencia de la pretensión indemnizatoria por el solo hecho de haber mediado el pago de una pensión. Así, es claro que no existe incompatibilidad alguna entre ser beneficiario de una pensión austera y simbólica, igual para todas las víctimas reconocidas, que demandar por daños en sede civil por el daño concretamente sufrido. Asegura que, por lo antes señalado, es improcedente la alegación de excepción de reparación integral o de pago que ha hecho valer el contradictor.

A mayor abundamiento, argumenta que los tribunales superiores de Justicia han rechazado sistemática y reiteradamente esa excepción, por lo que no cabe que el demandado con una interpretación bastante particular y cuestionable desde el punto de vista jurídico, trate de decir que en base a las leyes precitadas, las víctimas de violaciones a los derechos humanos estarían impedidas de demandar. Refiere que, la conclusión de la defensa fiscal pugna también con el propio artículo 76 de la Constitución Política, pues su resultado práctico sería que los tribunales de justicia no tendrían la facultad de conocer y resolver esta controversia, conociendo de este tipo de demandas de indemnización por crímenes contra el Derecho internacional, hay una nutrida jurisprudencia, dentro de la cual no se inscriben precisamente aquellos fallos enunciados que destaca el Consejo de Defensa del Estado, y sostiene que prueba de ello son los fallos a los que se remite al efecto, entre ellos, “Valencia Oyarzo Eliecer con Fisco de Chile, (Rol Excma. Corte Suprema 1092-2015). Indica que, el criterio predominante es el establecido ya en el año 2007 por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y se remite a jurisprudencia de ese Tribunal, entre estos, Caso Montes con Fisco de Chile, 10-07-2007;



Carrasco con Fisco con Fisco de Chile, 10-07-2007; Jara con Fisco de Chile, 23.09.2009, Rol 2839-2008; Caso “Vergara con Fisco de Chile”, 23.09.2009, Rol 2495-2008, transcribiendo sus considerandos pertinentes, como también de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile, “Caso San Javier” Rol 4723-2007, cuyo considerando pertinente transcribe. Complementa lo anterior, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, Rol 12.192-2015, de fecha 15 de junio de 2016, que rechazó el Recurso de Casación, interpuesto por el Fisco de Chile, fundado en infracción a los artículos 17 a 27 de la Ley 19.123, en relación a los artículos 19 y 22 del Código Civil, y por infracción al artículo 41 del Código de Procedimiento Penal, 2332, 2492, 2497 y 2514 del Código Civil, por dejar de aplicar las normas internas sobre prescripción, en contra de la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en los autos criminales Rol 2229-2014, de fecha 12 de agosto de 2015, que confirmando la sentencia de primera instancia, acogió la demanda de indemnización interpuesta por, Carmen Luz Quezada Fuentes, por el secuestro de su cónyuge, don Modesto Espinoza Pozo, desechando las excepciones opuestas por el Fisco de Chile, que son las mismas que invoca en estos autos y transcribe al efecto los considerandos pertinentes. Agrega que, en virtud del razonamiento planteado en dicha sentencia.

Termina señalando que, el razonamiento expuesto por el demandado no resulta concordante con la Carta Fundamental, ya que basarse en la ley 19.123 y especialmente en la Ley 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos, para decir que el daño moral ya está reparado llevaría necesariamente a la conclusión de que el Congreso de Chile estaría avocándose al conocimiento y resolución de una causa judicial pendiente, y ello es abiertamente inconstitucional. Añade que, si se aceptara la tesis Fiscal, el monto de la reparación que han recibido las víctimas estaría fijado de forma unilateral y absolutamente arbitraria por el responsable, quién luego afirma que ha pagado, lo cual pugna con el más elemental sentido de justicia.

Luego, en el apartado que denomina **III.- Derecho aplicable. Improcedencia de la excepción de prescripción extintiva (II.2)**, señala la existencia de un debate dogmático sobre la naturaleza de la responsabilidad del Estado y el estatuto jurídico aplicable. Indica haber citado doctrina y jurisprudencia pertinente, a efectos de establecer que el daño que causa un Estado por crímenes masivos y sistemáticos y que, el Fisco ha hecho lo propio defendiendo la aplicación de las normas de título XXXV del Libro IV del Código



Civil citando antecedentes, así como de aquellas reglas referidas a la prescripción extintiva. Sostiene que, sin perjuicio de lo anterior, sea cual sea el estatuto de responsabilidad aplicable, es indiscutible la existencia de responsabilidad del Estado, por hechos gravísimos que los particulares afectados no tienen obligación jurídica de soportar. En un Estado de constitucional de Derecho el principio de responsabilidad es parte de la esencia del mismo. La irresponsabilidad por actos del Estado es característica de regímenes absolutos, despóticos o autoritarios. Los daños que causa un Estado, más aún aquellos provocados intencionalmente, son hechos ilícitos que generan responsabilidad, lo cual es un principio del Derecho aceptado por las naciones civilizadas en los términos de la Corte Internacional de Justicia.

Reitera por último, la fundamental diferencia entre las reglas de la prescripción extintiva del Código Civil que buscan *sancionar* al acreedor negligente, o el régimen normativo aplicable a la reparación de daños causados por animales fieros, por remover las losas de una acequia, por personas ebrias u objetos que caen de la parte superior de un edificio, remitiéndose nuevamente a lo expuesto por el Magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Eugenio Raúl Zaffaroni, solicitando con ello, que se rechacen las peticiones de la contraria, en atención a que el estatuto legal aplicable al caso concreto, sobre la base de la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por nuestro país en los términos del artículo 5 inciso 2º de la carta fundamental, y de las normas vigentes no puede ser simplemente aquel aplicable a los negocios y relaciones jurídicas entre particulares.

A continuación, en su apartado que denomina, **IV.- Respecto a la Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia**, controvierte la afirmación que realiza el demandado en relación a que la Excma. Corte Suprema ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre esto, indicando que, si bien ello es cierto, la más reciente jurisprudencia del máximo tribunal de la República, en coincidencia con el Derecho internacional de los Derechos Humanos, ha variado el criterio reconociendo el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles o reparatorias que derivan de los crímenes de lesa humanidad atentatorios contra los Derechos Humanos, concediendo así la correspondiente indemnización, lo cual es hoy un **hecho público y notorio que puede verse semanalmente en la sección de noticias del sitio web del Poder Judicial** y que, el mismo principio ha sido reconocido, como se demuestra en su escrito de demanda, por la Comisión Interamericana de



Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, que además de buscar sancionar la responsabilidad penal de los más altos responsables, conoce también de la reparación por crímenes contra el Derecho Internacional conforme el artículo 75 del Estatuto de Roma, acciones de reparación que también gozan de imprescriptibilidad en los términos del artículo 29 del citado Estatuto.

En su apartado que titula **V.- Sobre el monto de lo demandado**, indica que la defensa fiscal cuestiona el monto de lo demandado, en atención a lo difícil que resulta en estos casos poder avaluar este tipo de perjuicios que por definición no son de naturaleza patrimonial, sin embargo, la normativa vigente nos exige presentar peticiones concretas. Argumenta que, no hay dinero que supla el dolor experimentado por su mandante, y con razón, más de algún estudioso se ha preguntado si se puede “reparar lo irreparable”, pareciendo hasta de mal gusto tener que justificar cada peso que se solicita, como de peor gusto cuestionarlo. Insinúa que, en todo caso, en la parte petitoria de la demanda señala, en subsidio, que se condene a “la suma que se estime ajustada a derecho, justicia y equidad” conforme el mérito de autos.

Por último, en el apartado que denomina **VI.- Sobre la procedencia del cobro de reajustes e intereses**, en cuanto a lo indicado en su contestación (II.4) la defensa fiscal relativo al rechazo de los reajustes e intereses en la forma solicitada, reitera lo expuesto en el libelo, destacando que es el juez de instancia quien determina la cuantía de las reparaciones, por lo que, procede que estas sean reajustadas desde la dictación del fallo de primera instancia, puesto que, este es el momento procesal en que queda fijado el monto de reparación. Indica que, la reajustabilidad, por otro lado, está ligada a la garantía de la reparación integral o plena, y del pago efectivo de las obligaciones. La desvalorización monetaria es algo que afecta a cualquier tipo de indemnización, por lo cual, es necesario acudir a un índice de reajustabilidad como es el Índice de Precios del Consumidor (IPC). Señala que, sobre la fecha de cálculo la doctrina constata que *“la jurisprudencia se ha ido progresivamente ordenando en torno a la idea de que la época relevante para la determinación del daño moral es la fecha de la sentencia de primera o segunda instancia, según sea la que efectúa la apreciación, porque sólo entonces el juez tiene una correcta percepción del valor en dinero que está reconociendo como indemnización”*. Indica que, respecto de los intereses, se remite a la doctrina el profesor José Luis Diez Schwerter, quien indica que hoy existe una tendencia jurisprudencial asentada en que para dar cumplimiento al



principio de la reparación integral, es menester que a la víctima no solo se le concedan reajustes sobre las sumas fijadas como indemnización, sino además intereses y respecto del momento desde el cual se conceden intereses por daño moral, se remite a sostenido por el profesor Enrique Barros Bourie, quien analizando la jurisprudencia señala que la tendencia por lo general, es que los intereses son reconocidos desde la fecha en que se dicta el fallo de primera o segunda instancia que fija el monto definitivo de la indemnización (coincidiendo así el período de reajustes con el de intereses) o desde que el fallo queda ejecutoriado.

CUARTO.- Que, por su parte, el Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, evacuando la **dúplica**, reitera todas y cada una de las excepciones, alegaciones y defensas opuestas en el escrito de contestación de la demanda, asimismo, se hace cargo a lo que señala como erradas afirmaciones contenidas en el escrito de réplica y en el apartado I de su presentación que denomina **EXCEPCION DE REPARACIÓN INTEGRAL**, refiere que, el actor reconoce que la ley 19.992 estableció una pensión de reparación en favor de las víctimas de prisión y tortura, sin embargo, señala que la defensa alegada sería improcedente, porque tal reparación otorgada por una ley especial no puede ser considerada como una indemnización de perjuicios para el actor. Al respecto, en primer lugar, reitera lo expuesto en la contestación de la demanda, precisando que tales prestaciones fueron claramente indemnizatorias del daño moral y constituyó un esfuerzo del Estado para dar solución y reparar el perjuicio. Sostiene que, en efecto, la ley 19.992 tuvo un fin reparatorio, ya que en caso contrario, no tendría otra explicación o justificación el pago que se otorga a determinadas personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura. Asegura que, dicho mecanismo indemnizatorio establecido por la ley, es sin duda, especial y trasunta un sistema que el Estado asumió voluntaria y directamente en favor de estas personas, para la reparación de daños morales, resultando por ello, excluyente de otras indemnizaciones, tanto porque sus beneficios son renunciables, como por cuanto la ley sólo la hace compatible con otras pensiones, lo que determina que la indemnización demandada sea improcedente, por ser incompatible con los beneficios ya otorgados por el Estado, todo lo cual constituye una excepción de reparación integral y satisfactiva, y no solo una incompatibilidad. Afirmar que, todas las alusiones a que el término reparar no implica indemnizar, no resultan argumentos sólidos, pues claramente al pagarse dinero, se les confirió una indemnización por la vía legal, la que fue aceptada por el actor,



resultando evidente que cada persona tiene derecho a estimar que no ha sido suficientemente resarcida por el beneficio que la ley otorga, pero debe tenerse en consideración que el Estado en su conjunto hace un esfuerzo para otorgar no sólo una pensión, sino que además consagra otros beneficios sociales de salud y de apoyos técnicos y de rehabilitación para la superación de lesiones surgidas a consecuencia de la prisión política o la tortura. Indica que, asimismo, se concedieron beneficios educacionales, que si bien no están cuantificados, representan un importante costo para el Estado, encontrándose de este modo, el demandante en una situación especial por todos los beneficios compensatorios del daño moral como son el Programa de salud Prais, beneficios educacionales, etc y la pensión vitalicia que solo tiene como causa el reparar el daño moral sufrido y no es una pensión meramente asistencial, porque si bien existen las pensiones asistenciales, ellas tienen como fuente el cubrir otras necesidades sociales a las personas que se encuentran en estado de indigencia, situación totalmente distinta a la pensión otorgada al demandante. Termina indicando que, por lo antes expuesto, la indemnización demandada es improcedente, por haber sido ya pagada por el Estado de acuerdo a la ley 19.992 y obviamente resulta incompatible con los beneficios ya otorgados por el Estado, los que tuvieron un carácter claramente indemnizatorio del daño moral, asegurando que, por ello no es pertinente la alegación del actor en el sentido que la indemnización sólo la puede determinar el tribunal, lo que no es así, pues nada obsta a que quien quiere reparar como el afectado por el hecho puedan convenir una reparación del daño moral, el primero, ofreciendo una suma o pensión vitalicia y el otro aceptando dicho ofrecimiento.

Continuando en su acápite que denomina **II.) RESPECTO DE LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION**, señala que el actor procede a repetir argumentaciones dadas en la demanda, confundiendo la imprescriptibilidad de las acciones penales previstas en el derecho internacional para los delitos de lesa humanidad, con las acciones civiles indemnizatorias. Sostiene que, ante ello, frente a la reiteración de afirmaciones acerca de la improcedencia de aplicar normas de derecho interno, en razón de tratarse de crímenes de lesa humanidad, cabe señalar que esta parte ha dejado claramente establecido en la contestación de la demanda que al tenor de nuestro derecho interno y de la jurisprudencia reiterada habida en torno al tema, que los tratados citados no establecen conceptos de imprescriptibilidad. Hace presente que lo antes que, lo antes indicado claramente quedó consignado en la sentencia dictada por la



Excma. Corte Suprema en la causa “Domic con Fisco”, donde se analizan las normas del Convenio de Ginebra señalando expresamente que **la exoneración que impide el artículo 131 del Convenio concierne a las responsabilidades penales derivadas de dichas infracciones y no comprende la obligación de indemnizar perjuicios**. Señala que, lo mismo ocurre con el **Protocolo Adicional I**, de la mencionada Convención que en su artículo 91 obliga a la Parte en conflicto que violare las disposiciones de los Convenios o del presente Protocolo “a indemnizar, si hubiere lugar a ello”, y agrega que “será responsable de todos los actos cometidos por las personas que formen parte de sus Fuerzas Armadas”, **no es atinente a la materia de autos**, tanto por haberse aprobado después que se produjeron los hechos que motivan la demanda, cuanto, porque no hay lugar al pago de indemnización si la acción respectiva se ha extinguido por prescripción y menos si ello ocurre merced a normas que pertenecen a un Código de aplicación general dictado con mucha anterioridad a esos hechos. Indica que, se argumenta también acerca de la existencia de un error de la defensa fiscal, al postular la aplicación de las normas del derecho privado y en ese sentido las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagra y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado y entre ellas está el Art. 2.497 C.C. que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente “Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo.” Indica que, a ese tenor existen recientes y reiterados pronunciamientos de la Excma. Corte Suprema cuyas copias indica acompañar a estos autos, que han acogido la procedencia de aplicar las normas del derecho común relativas a la prescripción en esta clase de juicios. Rememora que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización, sino que, solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción. Menciona que, en el caso de marras, el ejercicio de esta acción ha sido posible durante un número significativo de años, desde que las víctimas estuvieron en situación de hacerlo.

Finaliza, remitiéndose a los argumentos referidos en la contestación de la demanda en lo que toca a las demás alegaciones vertidas en el escrito de réplica.



QUINTO.- Que, recibida la causa a prueba, consta en autos que el demandante acompañó por el primer otrosí de su libelo de folio 1 y por presentaciones de folios 20, 21 y 32, la siguiente prueba documental que corresponde a los siguientes documentos:

1.- Copia Autorizada de Escritura Pública suscrita en la Notaría de Pichilemu del Notario Público don Juan Pablo Urzúa Ortiz De Rosas anotada bajo repertorio N° 29-2018, donde consta Mandato Judicial, con Firma Electrónica Avanzada, de fecha 05 de enero de 2018, otorgado por Olguin Gonzalez, Augusto del Carmen a los abogados Paz Becerra Urzúa y Francisco Javier Jara Bustos.

2.- Copia de la página del Informe de la **“Nómina de personas reconocidas como víctimas”**, de la lista elaborada por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura (Listado Informe Valech II). Registro como víctima de Augusto del Carmen Olguín González N° 6130, donde consta el reconocimiento por parte del Estado de Chile, con su nombre y número correlativo.

3.- Copia de fallo de la Excma. Corte Suprema de Justicia de causa “Soto Lastra con Fisco de Chile”, Rol de ingreso Excma. Corte Suprema N° 15298-2018, sentencia de 19 de diciembre de 2018.

4.- Copia de fallo de la Excma. Corte Suprema de Justicia de causa “Cubillos con Fisco de Chile”, Rol de ingreso Excma. Corte Suprema N° 29454-2018, sentencia de 24 de diciembre de 2018.

5.- Copia de fallo de la Excma. Corte Suprema de Justicia de causa “Eva Palominos Rojas y Patricia Zúñiga Barros, Caratulada “C/ Juan Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff Martchenko, Luis Moren Brito, Basclay Zapata Reyes, Gerardo Godoy Garcia. Qte.: Eva Palominos Rojas y Patricia Zúñiga Barros”, Rol de ingreso Excma. Corte Suprema N° 40168-2018, sentencia de 18 de octubre de 2018, por los delitos de secuestro y aplicación de Tormentos.

6.- Certificado de Calificación de fecha 30 de noviembre de 2018, correspondiente a don Augusto del Carmen Olguín González como víctima reconocida por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, Comisión Valech II, emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y nómina adjunta donde consta el demandante en calidad de víctima con el número 6130.



7.- Copia autorizada de la Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech II, por don Augusto del Carmen Olguín González, de 19 páginas, la que incluye: i. Individualización de la documentación aportada (p. 1); ii. Precalificación y antecedentes (pp. 2-3); iii. Gestiones de la Comisión (pp. 4-5); iv. Ficha de ingreso como preso político y torturado que da cuenta de su detención en el Retén de Pichilemu (pp. 6-10); v. Copia de cédula de identidad del demandante (p. 11); vi. Declaración jurada de la víctima (p. 12); vii. Declaraciones y certificados de testigos (pp. 13-15); viii. Sistema de consulta de la Comisión Valech II, que da cuenta de los registros de la detención del demandante (pp. 16-19).

SEXTO.- Que, asimismo, la parte demandante hizo concurrir a estrados a los siguientes **testigos**, cuyas declaraciones constan en acta contenida en folio 25 de la carpeta electrónica, quienes debidamente juramentados y legalmente examinados deponen al tenor de la interlocutoria de prueba de folio 14, y se encuentran contestes que el daño físico y psicológico que sufrió el actor fue producido por el actuar de carabineros, quienes señalan: **1.- don Denis Lizana Soto**, jubilado, domiciliado en calle Campos sin número, comuna de Pichilemu, Región del Libertador Bernardo O'Higgins, al punto 1 de prueba, expresa que pertenece a una agrupación con personalidad jurídica de ex presos políticos de Pichilemu al igual que el demandante Augusto Olguín, siendo por su propia versión que se enteró que a éste lo tomaron preso y lo llevaron a la Comisaría de Pichilemu donde fue torturado psicológica y físicamente, no le daban comida ni agua y le pegaban culatazos en la espalda y las costillas, siendo mal tratado todo el periodo que estuvo en la comisaría, después, lo trasladaron a un sitio eriazo, vendado y lo dejaron botado en ese lugar, sin saber si las personas seguían allí por lo que no se atrevía a hacer nada, permaneciendo un largo tiempo de esa manera. Hasta la fecha él es una persona retraída, con temor, no duerme bien, y por lo que ha contado tiene pesadilla. Físicamente quedó con una cojera debido a los golpes que recibió y siempre se queja de dolor en las caderas a causa de los culazos que recibió. **Repreguntado** para decir quienes tomaron detenido al señor Olguín y lo torturaron, responde que Carabineros, agentes del Estado. Repreguntado para decir si sabe por qué tomaron detenido y torturaron al señor Olguín, señala que por el solo hecho de ser opositor a la dictadura. Al punto 2 de prueba, se remite a lo declarado en el punto anterior y en cuanto al monto del perjuicio señala ser incalculable considerando el daño que se le hizo. Repreguntado para decir si sabe si el daño ha sido reparado señala que no ha



sido reparado; y **2.- don Rafael Del Carmen Moraga Moraga**, jubilado, domiciliado en Jaramillo s/numero, comuna de Pichilemu, Región del Libertador Bernardo OHiggins, quien al punto 1 de prueba señala constarle por lo que el demandante Augusto Olguín le ha relatado del perjuicio psicológico que sufrió y daño físico que fue producido por Carabineros que, según él, y de acuerdo a su actuación lo marca hasta el día de hoy. Le contó que fue tomado preso, torturado, amenazado de muerte y abandonado en un sitio lejos de donde él vivía. Tiene heridas en su cuerpo y en cuanto al daño psicológico le consta que cuando ve a Carabineros le produce pánico, es una persona retraída. Al punto 2 de prueba, señala que, en cuanto a la existencia y naturaleza de los perjuicios son los antes referidos y en cuanto al monto no lo sabe.

SÉPTIMO.- Que, por su parte el demandado Fisco de Chile por el primer otrosí de su escrito de contestación, aparejó la siguiente prueba documental reiterada por presentaciones de folios 22 y 28, que no fuere objetada por la actora y que corresponden a los siguientes documentos:

1.- Ordinario Nro 54012/2018 de fecha 20 de junio de 2018 emitido por la Sra. Jefe de la Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social que informa sobre las pensiones y montos globales otorgados por el Estado al demandante a través de las leyes de reparación del daño moral, el que informa que el beneficio de reparación de la víctima de Prisión Política y Tortura, Valech, don Augusto Olguín González, Run 5.586.159-5, ha recibido por concepto de Pensión de Reparación Ley 19.992 durante el periodo comprendido entre el 01/10/2011 al 30/05/2018, la suma de \$ 14.234.139.-; Aguinaldo del periodo \$ 230.329.- y Aporte único Ley 20.874 \$ 1.000.000.-

2.- Copia de Resolución Tra N° 45/142/2017 Región Metropolitana Consejo de Defensa del Estado que nombra a doña Ernestina Ruth Israel López en el cargo de Abogado Procurador Fiscal de Santiago

OCTAVO.- Que, del mérito de autos, documentos individualizados en el motivo quinto del presente fallo y declaraciones de testigos aportadas por la parte demandante, que son contestes con las declaraciones del actor, y datos consignados en los documentos acompañados en especial aquellos singularizados en los numerales 2 y 7 del motivo quinto, se encuentra acreditado que, efectivamente don Augusto Del Carmen Olguín González, con fecha 20 de septiembre de 1973, fue detenido en su domicilio, sin orden judicial, por funcionarios de Carabineros de Chile y conducido a un cuartel de Carabineros de Pichilemu, donde permaneció ilegítimamente privado de libertad por dos días y una noche, siendo en ese lapso de tiempo, colgado de



las vigas de la caballeriza colindante al recinto policial, golpeado continuamente, privado de alimento y agua y sometido a torturas, tratos crueles e inhumanos, efectuados por los agentes del Estado, dejándole luego abandonado en una calle bajo amenaza de no moverse con sus ojos vendados, hechos que hasta la fecha le han provocado secuelas tanto físicas como psicológicas y emocionales. En ese sentido, se han acompañado Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que certifica que el demandante don Augusto Del Carmen Olguín González, se encuentra calificado como víctima en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocido como Comisión Valech; nómina que acredita la calidad de calificado como prisionero político y torturado del demandante Augusto Del Carmen Olguín González, con registro de víctima N° 6130; copia autorizada de la Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech II, por don Augusto del Carmen Olguín González, documentos que no fueron objetados, como asimismo, los atestados de testigos quienes cuyo relatos fueron contestes con el resto de antecedentes reunidos en autos y que permiten acreditar que el demandante como consecuencia de los actos de tortura y otros tratos crueles a los cuales fue sometido luego de ser detenido sin orden judicial y privado ilegítimamente de libertad hasta la fecha padece secuelas físicas, síquicas y emocionales a consecuencia de lo ilícitos de los que fue víctima.

NOVENO.- Que, así las cosas, es posible establecer que estos mismos hechos descritos en el párrafo precedente, son los que sustentan la acción de indemnización de perjuicios que deduce el demandante en contra del Fisco de Chile, a raíz de los daños y perjuicios sufridos, por su repentina, forzada e injustificadas detención, privación de libertad, torturas, amenazas de muerte y otros tratos crueles e inhumanos y que fueron llevados a cabo por agentes del Estado, particularmente por funcionarios de Carabineros de Chile, hechos que caben dentro de la calificación de crimen de lesa humanidad y que constituyen, por ende, una violación grave a las normas internacionales sobre Derechos Humanos.

DÉCIMO.- Que, de lo reseñado en los motivos precedentes ha quedado establecida la responsabilidad del Estado en el caso en análisis, resultando necesario consignar que en estos autos el actor ha accionado de indemnización de perjuicios pretendiendo obtener el resarcimiento de los daños morales sufridos y ocasionados por y a consecuencia del actuar de agentes del



Estado en la detención ilegal, privación de libertad, actos de tortura y otros a los que fue sometido.

UNDÉCIMO.- Que, solicitando el rechazo de la demanda deducida, el Fisco de Chile ha interpuesto la excepción de improcedencia de la indemnización, fundada en que el actor ya ha sido indemnizado de conformidad a la Ley 19.123, en los términos analizados en el motivo segundo del presente fallo.

DUODÉCIMO.- Que, atendida la naturaleza de la reparación integral establecida en la Ley 19.123 y sus modificaciones, otorgada en forma voluntaria por el Estado de Chile en el marco de cumplimiento de tratados internacionales ratificados por Chile, y que en ella misma establece que los beneficios por ella otorgados no son incompatibles con otras reparaciones, siempre reconociendo el principio de reparación integral que sostiene el ordenamiento regulatorio internacional de los Derechos Humanos, no resulta suficiente en modo alguno para fundamentar una excepción en los términos como lo ha hecho la demandada. Así, es necesario precisar que la normativa invocada por el Estado, que solo establece pensiones y bonos asistenciales, no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que en esta causa se persigue, (artículo 24) sin que ella haya sido otorgada para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los Derechos Humanos, tratándose de distintas formas de reparación, no importando en caso alguno la renuncia de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare la procedencia de una indemnización total por daño moral, por los medios que autoriza el ordenamiento jurídico. Así, acorde con lo razonado anteriormente, resulta procedente rechazar la excepción opuesta por el Fisco de Chile.

DÉCIMO TERCERO.- Que, por lo demás, a juicio de esta sentenciadora, si bien específicamente en el caso de autos, en cuanto al demandante Augusto Del Carmen Olguín González, en su calidad de víctima directa de las violaciones a los Derechos Humanos, es beneficiario de una pensión mensual de reparación conforme a la Ley N° 19.123, -principal beneficio concedido a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, cuyo establecimiento tuvo el propósito de “desagravio, satisfacción completa de la ofensa, daño o injuria”, si resulta procedente que sea resarcido del evidente daño moral que en diversas dimensiones ha padecido, que no requiere mayor justificación, sin perjuicio de ello, se relatan vivencias personales del demandante.



DÉCIMO CUARTO.- Que, en ese contexto la demandada hace referencia a la identidad de causa entre lo pedido en autos y las reparaciones realizadas, aduciendo que el Estado ha realizado una serie de esfuerzos para reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y que éstas no sólo han cumplido con los estándares internacionales de justicia transicional sino que además han provisto indemnizaciones razonables con la realidad financiera que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencias de tales violaciones, por lo que no pueden exigirse nuevas reparaciones.

DÉCIMO QUINTO.- Que, atendida la naturaleza de la reparación establecida en la Ley 19.123 y sus modificaciones, otorgada en forma voluntaria por el Estado de Chile en el marco de cumplimiento de tratados internacionales ratificados por Chile, y que en ella misma establece que los beneficios por ella otorgados no son incompatibles con otras reparaciones, siempre reconociendo el principio de reparación integral que sostiene el ordenamiento regulatorio internacional de los Derechos Humanos, no resulta suficiente en modo alguno para fundamentar una excepción en los términos como lo ha hecho la demandada. Así, es necesario precisar que la normativa invocada por el Estado, que solo establece pensiones y bonos asistenciales, no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que en esta causa se persigue, (artículo 24) sin que ella haya sido otorgada para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los Derechos Humanos, tratándose de distintas formas de reparación, no importando en caso alguno la renuncia de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare la procedencia de una indemnización total por daño moral, por los medios que autoriza el ordenamiento jurídico.

Que, por lo demás, a juicio de esta sentenciadora, y a mayor abundamiento específicamente en el caso de autos, en cuanto al actor don Augusto Olguín González, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura Valech, ha sido beneficiario de una asignación conforme a la Ley 19.123, -principal beneficio concedido a las víctimas y los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, cuyo establecimiento tuvo el propósito de “desagravio, satisfacción completa de la ofensa, daño o injuria”, sí resulta procedente que sea resarcido del evidente daño moral que en diversas dimensiones ha padecido y encontrándose acreditado en autos la perpetración del delito de detención ilegal y torturas así como la participación en los hechos de agentes del Estado en sus calidades de garantes de la seguridad pública,



dependiente del Estado de Chile, existe por ende el daño moral comentado, el cual como se dijo, no solo debe ser reparado por los otros beneficios sociales contemplados en la Ley 19.123, sino que, también debe ser reparado y regulado prudencialmente de acuerdo a los criterios imperantes en nuestro ordenamiento jurídico y el principio de equidad. Así, acorde con lo razonado anteriormente, resulta procedente rechazar la excepción opuesta por el Fisco de Chile, por cuanto como ya se expresare, la ley que las dispuso no las instituyó bajo un carácter excluyente, de suerte tal que no es posible concluir que por su otorgamiento resulten improcedentes las indemnizaciones que ahora solicita el actor Augusto Del Carmen Olgún González en su libelo indemnizatorio.

DÉCIMO SEXTO.- Que, en mérito de lo anterior, esta sentenciadora sostiene que lo que resulta relevante es el daño moral sufrido por aquellos que reclaman indemnización, que en caso de acreditarse no puede menos que acogerse su pretensión y otorgar al actor una indemnización. Ahora bien, sin perjuicio que las reparaciones simbólicas y demás beneficios, tienen y han tenido un significado notable, no puede esperarse que esa sola circunstancia impida que el demandante pueda solicitar reparación pecuniaria, dado que el énfasis está en su otorgamiento y regulación, no en la acción, por lo que acorde con lo razonado, resulta procedente rechazar la excepción opuesta por el Fisco de Chile.

DÉCIMO SEPTIMO.- Que, en segundo término, el Fisco de Chile ha deducido la excepción de prescripción extintiva de la acción intentada, ello conforme lo establecido en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación a lo dispuesto en el artículo 2.497, en los términos latamente expuestos en el motivo Segundo de esta sentencia, sosteniendo que desde el 28 de Julio de 1974, y aun entendiendo suspendido el plazo de prescripción hasta la restitución de la democracia, 11 de Marzo de 1990, o hasta la entrega del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, 04 de Marzo de 1991, a la fecha de notificación de la demanda, **04 de junio de 2018**, según consta en atestado receptorial contenido en folio 5, ha transcurrido en exceso el plazo que establece el artículo 2.332 del Código Civil. **En subsidio**, opone la prescripción extintiva de cinco años contemplado para las acciones y derechos por el artículo 2.515, en relación al artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a la indemnización y la fecha de notificación de la demanda ya referida, transcurrió con creces el plazo establecido en el artículo 2.515.



DÉCIMO OCTAVO.- Que, a efectos del debido análisis de la excepción en comento, es necesario tener presente que el fundamento jurídico de la acción deducida en autos lo sitúa el actor en la responsabilidad del Estado por el daño moral en el Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, en razón del hecho propio del Estado al haber actuado como órgano, cometiendo un ilícito a través de sus agentes, siendo estos mismos hechos que sustentan la acción de indemnización de perjuicios que deduce la demandante en contra del Fisco de Chile, posibles de ser calificados como crimen de lesa humanidad y que constituyen, por ende, una violación grave a las normas internacionales sobre derechos humanos, y que, a través de los elementos probatorios ya ponderados, permiten desprender con claridad que el Estado reconoció la calidad de víctima de violación a los Derechos Humanos o de violencia política a don Augusto Del Carmen Olgún González. En consecuencia, se demuestra que se está en presencia de un afectado por un delito de lesa humanidad, de manera que el derecho de las víctimas de este tipo de ilícitos encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y normativa de los tratados internacionales ratificados por nuestro país, los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger el derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en nuestra carta fundamental, en la especie inciso 2° de los artículos 5 y 6 de la Constitución Política de la República.

DECIMO NOVENO.- Que, asentado así lo anterior, corresponde continuar analizando la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile, haciendo presente que tratándose de delitos de lesa humanidad, su acción persecutoria es imprescriptible, por lo que necesariamente se deberá desestimar la excepción de prescripción puesta por la demandada. De este modo, dada la especial naturaleza de los ilícitos cometidos, no controvertidos por el demandado, aparece que ellos, que son el fundamento de la demanda, constituyen un crimen de lesa humanidad y, por ende, una violación grave a las normas internacionales sobre Derechos Humanos, por lo que resulta improcedente declarar la prescripción de la acción indemnizatoria ejercida, como se dirá.

VIGÉSIMO.- Que, en efecto, en la clase de delito por el cual se sustenta la acción indemnizatoria reclamada, no es coherente entender que la acción civil que de ellos deriva esté sujeta a las normas sobre prescripción en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional de Derechos Humanos, integrante del ordenamiento



jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió a las personas calificadas como víctimas de prisión política y torturas durante el período 1973-1990, reconocidas por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que, a mayor abundamiento, es necesario tener asimismo presente que, pesando sobre el Estado el deber de reparar a la víctima, este deber encuentra también su consagración en el derecho interno en el sistema de responsabilidad del Estado que deriva además del artículo 3 de la **Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado**, en cuanto dispone que la administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetarse es el de la responsabilidad, lo que recoge expresamente en su artículo 4. Por consiguiente, cualquier diferenciación entre ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual es discriminatorio y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que, sin perjuicio de lo ya expresado, corresponde señalar que los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, de modo que estas no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, toda vez que, si se verifica un hecho ilegítimo imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esa índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación. En el mismo sentido la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones. En este sentido autores como Humberto Nogueira Alcalá, “Las Constituciones Latinoamericanas” en Anuario de derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000 han señalado que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del mismo.



VIGÉSIMO TERCERO.- Que, en consecuencia, solo corresponde como se señaló, desestimar la excepción de prescripción opuesta por el demandado de autos, tanto la excepción formulada por vía principal como aquella formulada por vía subsidiaria.

VIGÉSIMO CUARTO- Que, en tercer término, el Fisco de Chile ha deducido en subsidio de las defensas y excepciones precedentes la alegación en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido, y en subsidio de ello solicita que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales, alegaciones a las que se deberá estar a lo que se dirá más adelante.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que, por último, en cuanto a la improcedencia del cobro de reajustes e intereses, el Fisco de Chile plantea que éstos solamente pueden devengarse en la medida que la sentencia los acoja y la obligación se establezca, los que sólo podrán devengarse, para el evento que se acoja la pretensión de la actora civil, desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y el representado de la defensa incurra en mora. Esta sentenciadora al respecto, estima que al haberse establecido la calidad de la actora de víctima de la atentados y violaciones a los derechos humanos provenientes de parte de agentes del Estado, queda en evidencia la calidad de garantes de la seguridad pública y de dependientes del Estado de Chile y es ahí donde se evidencia el daño moral y su extensión, que esta sentenciadora estima debe ser resarcido y regulado prudencialmente, y reajutable desde la fecha de la dictación de esta sentencia.

VIGÉSIMO SEXTO.- Que, se encuentra establecida la comisión de violación a los Derechos Humanos por agentes del Estado, de la cual surge la responsabilidad del Estado conforme a lo establecido en el artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental en cuanto prescribe que los órganos del Estado deben someter su acción a la constitución y a las leyes, y son responsables de sus actos de acuerdo a la ley, como asimismo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado al disponer que “El Estado será responsable de los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que las hubiere realizado”. Cabe señalar que el citado principio se ve reiterado en el artículo 44 del mismo texto legal. Al efecto, de las normas



citadas en el párrafo precedente, solo es dable concluir que tanto el constituyente como el legislador han expresado en forma inequívoca su intención de que el Estado se haga responsable del actuar de sus agentes, cuando este ocasiona un daño al administrado, responsabilidad que por su naturaleza cae en el ámbito de la responsabilidad extracontractual.

VIGÉSIMO SEPTIMO.- Que, necesario resulta a continuación, el análisis del daño cuyo resarcimiento se pretende por el actor, en cuanto presupuesto necesario para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios que se intenta en esta causa. Al efecto es necesario precisar que se trata en la especie del resarcimiento del daño moral, que requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, recordando que el daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física, y/o en los sentimientos o afectos de una persona. El daño moral, es en consecuencia, toda lesión causada culpable o dolosamente que signifique molestias, perturbación en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona e imputable a otra, daño que no es de naturaleza propiamente económica y que no implica, un deterioro o menoscabo real y directo en el patrimonio de la misma, susceptible de prueba y determinación directa, sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva.

VIGÉSIMO OCTAVO.- Que, atendidas las particularidades reseñadas en el motivo precedente, es dable desprender que la comprobación de la inobservancia o agravio del derecho subjetivo envuelve al mismo tiempo, la prueba de la efectividad del daño moral, de suerte que comprobada la existencia de un delito, como es el caso de autos, forzoso es concluir que se ha producido un daño y que debe ser reparado, toda vez que no podría ser de otra manera, en tanto, materialmente resulta extremadamente difícil, medir con exactitud la intensidad con que las lesiones han afectado a la víctimas, por la naturaleza del perjuicio provocado. Por ello, la naturaleza del dolor no hace indispensable la prueba del mismo, sino que se trata de un hecho evidente que las lesiones físicas y mentales sentidas, experimentadas por el sujeto causan un sufrimiento, que no requiere de evidencia, pero que en todo caso debe ser indemnizado por quien los ocasionó, tomando en cuenta todos los antecedentes reunidos y debiendo hacerse una apreciación equitativa y razonable por el tribunal.



VIGESIMO NOVENO.- Que, en el caso de autos, en relación al daño sufrido por el actor producto de la detención ilegítima, privación de libertad y actos de tortura a los cuales fue sometido durante más de dos días, es dable presumir que le produjo un dolor grave, angustia, aflicción y natural temor y miedo, sentimientos de profunda inseguridad e incertidumbre al momento de producirse los hechos y que innegablemente se han prolongado a lo largo de su vida, dejando una marca indeleble en su desarrollo posterior, una herida en la estructura personal y vital que no puede ser cerrada totalmente, conclusión que se ve inequívocamente corroborada y que se infiere necesariamente de los testimonios analizados en el motivo sexto, que dan cuenta de los padecimientos sufridos, y secuelas psicológicas.

TRIGÉSIMO.- Que, encontrándose acreditado que el actor sufrió una lesión o detrimento en su persona, en el desarrollo de la misma, lo que es dable presumir desde las máximas de la experiencia, y la naturaleza de los hechos acreditados en autos, que afectaron su integridad psíquica, su libertad, sus afectos, estabilidad, esto es, en general, los atributos o cualidades morales de una persona, con las consiguientes repercusiones en la normalidad de su existencia, necesario resulta acceder a la demanda de indemnización del daño moral experimentado por el actor, el que atendido los antecedentes que obran en el proceso y que han sido reseñados en los motivos anteriores, se accederá a la demanda de autos, teniendo presente los criterios de coherencia en la interpretación de los antecedentes, fijando a título de indemnización de perjuicios por el daño alegado prudencialmente la suma única y total de \$35.000.000.-(treinta y cinco millones de pesos) para el demandante de autos.

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Que, debiendo pagar la demanda la suma de dinero ordenada pagar en el motivo precedente, ello deberá efectuarse debidamente reajustada de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de la presente sentencia y aquella en que efectivamente se realice el pago, más intereses corrientes para operaciones reajustables, desde que la presente sentencia revista el carácter de ejecutoriada, según liquidación que se practicará en su oportunidad.

Y, vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1968 y siguientes del Código Civil, 144, 159, 254 y siguientes, 342, 346 N° 3, 384, 430, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Ley 19.123; artículo 5 y 6 de la Constitución Política de la República, se declara:

I.- Que se rechaza la excepción de prescripción opuesta por la demandada en sus diversas acepciones.



II.- Que se acoge, con costas, la demanda de indemnización de perjuicios por crímenes de lesa humanidad interpuesta en folio 1, en cuanto la demandada deberá pagar al demandante, don Augusto Del Carmen Olguín González, la suma de \$35.000.000.-(treinta y cinco millones) por concepto de daño moral, con reajustes e intereses en la forma indicada en el motivo trigésimo primero.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Dictada por doña Jacqueline Dunlop Echavarría, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, treinta de Junio de dos mil veintiuno**

